

IBEROAMÉRICA

POR JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ

Introducción

Las políticas nacionales individuales y subregionales de las naciones iberoamericanas no son percibidas de la misma manera por los actores de la región, por la principal potencia del continente americano, los Estados Unidos, ni por aquellas naciones europeas que, como España y Portugal, fueron las potencias colonizadoras de Iberoamérica. Reconocer las variaciones que se están produciendo en cada situación nacional y subregional es esencial para fortalecer la confianza entre los países de la zona, de manera que puedan diseñar las políticas más adecuadas, además, los que estamos al otro lado del Atlántico podemos percibir y comprender sus problemas y necesidades individuales y de conjunto, a fin de poder ser puente, camino y vehículo entre Iberoamérica y Europa.

La población española en general y nuestras instituciones tienen más información y conocimientos de Europa y de los foros de Seguridad y Defensa del Viejo Continente, OTAN, Unión Europea, UEO y OSCE, que de las naciones iberoamericanas, hasta el punto que los estudios y análisis de mayor difusión internacional sobre estos países proceden de fuentes anglosajonas. Pero éstas carecen de la sensibilidad y también del rigor correspondientes por diversos motivos, entre los cuales debemos citar las diferentes idiosincrasia, mentalidad y cultura y los propios intereses estratégicos. A este respecto, Octavio Paz decía que la diferencia entre la comunidad anglosajona y la hispana es que en aquella priman los méritos

del individuo y los valores materiales, mientras que en la iberoamericana son la familia y los valores espirituales.

Los españoles a su vez vienen disminuyendo sus conocimiento e interés por Iberoamérica, en un proceso lento, casi imperceptible, hasta que recientemente se ha hecho evidente, tal como se ha puesto de relieve en una encuesta realizada en octubre de 1997 por Demoscopia para la Asociación de Periodistas Europeos. En otra parte de este estudio se facilitan algunos datos de dicho trabajo de investigación, en el que destaca que en dicho mes la imagen que de Iberoamérica tenían los españoles era de buena o muy buena para el 49 por ciento cuando en 1995 dicha cifra era del 65 por ciento, así como que el 48 por ciento de nuestros compatriotas opinaba que España debería estar más unida con Europa frente a un 20 por ciento que estimaba debería estarlo con Iberoamérica.

Son estas las razones por las que este Panorama Estratégico de Iberoamérica ha de tener forzosamente una estructura distinta a la de los otros que conforman este documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Para comprender los problemas que afectan a las naciones iberoamericanas, en particular los que se refieren a la Seguridad y la Defensa, necesitamos un punto de partida muy distinto, tenemos que arrancar del Siglo XIX, poco después de la independencia de aquellas naciones; sólo así podremos conocer cómo y por qué se ha llegado al momento histórico presente, algo poco conocido por nuestros conciudadanos.

Antecedentes históricos

Con la independencia de los territorios españoles de Iberoamérica, los Estados Unidos iniciaron una política destinada a llenar el vacío estratégico dejado por España y que pretendían ocuparlo otras naciones europeas que, como Francia y Gran Bretaña, ya poseían algunos territorios coloniales en la región; y otras potencias, como Alemania, deseosa de extender su influencia hacia el Atlántico Sur, y la Rusia zarista, que intentaba poner también su pie en el continente americano. Es por ello por lo que el presidente norteamericano Monroe advirtió en una declaración en diciembre de 1823 que:

«Debemos a la sinceridad y a las amistosas relaciones existentes ente Estados Unidos del Norte de América y esas potencias (europeas), declarar que consideramos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y nuestra seguridad».

De esta forma, los Estados Unidos pudieron, sin graves obstáculos, ir consolidando paulatinamente sus fronteras y comenzar a extender su influencia política y económica sobre el subcontinente iberoamericano, para lo cual en 1889 convoca en Washington la primera Conferencia Internacional de los Estados Americanos. En las postrimerías del siglo XIX, provoca la guerra con España, iniciando así una fuerte expansión exterior en Centroamérica y el Caribe, para hacer propios los principios de Mahan sobre la necesidad del dominio del mar como exponente de la fortaleza de una nación que desea ser preponderante sobre el hemisferio donde se encuentra su propio territorio. Con la *Enmienda Platt*, que fija las relaciones con Cuba, en la que se prevé su derecho a intervenir en la isla, la anexión de Puerto Rico, la segregación de Panamá de Colombia con el fin de construir un canal que comunique sus costas del Oeste con las del Este y tras la guerra con México, amplía sus fronteras por el suroeste, que quedan fijadas en el Río Grande. Durante esta época, merced a su política de intervención, sus tropas actúan e incluso en algunos casos de forma reiterada, en Nicaragua, Haití, Santo Domingo y la República Dominicana, política que es confirmada por Robert Olds, que en 1927 proclamó que Centroamérica constituía una legítima zona de influencia para los Estados Unidos, por lo que controlarían los destinos de las naciones de América Central en beneficio de su propia seguridad.

Con el propósito de poder materializar esta política durante el período comprendido entre las dos Guerras Mundiales, el Estado Mayor Interejércitos norteamericano elaboró unos llamados «*Colors Plans*» (debido a que cada uno de estos planes tenía el nombre de un color) concebidos para intervenir en todas las repúblicas iberoamericanas y comienzan a acreditar misiones militares en éstas, destinadas a neutralizar la presencia de delegaciones del mismo signo que habían sido establecidas por Alemania, Francia y Reino Unido.

Nace el Sistema Interamericano de Defensa

El fracaso de la doctrina Monroe y el nacimiento de un fuerte nacionalismo en las repúblicas hispanoamericanas llevó al presidente Roosevelt a variar totalmente la política de su país con las naciones del Sur, derogando la *Enmienda Platt* sobre Cuba y negándose a intervenir militarmente en Cuba y Haití, lo que le permitiría patrocinar la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz, que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre de 1936, con el objeto de definir la forma y los medios que garantizaran la paz en la región frente a cualquier amenaza interior y exterior. La confe-

rencia puede considerarse como el punto de partida del Sistema Interamericano de Defensa. Ello obligaría a los militares del Pentágono a sustituir los *Colors Plans* de carácter unilateral por otros de naturaleza combinada, que se conocían como *Rainbow Plans*. Sucesivas conferencias interamericanas fueron facilitando el desarrollo del Sistema de Defensa y con motivo de la II Guerra Mundial se aprobó en 1940 la llamada «Ley de la Habana», por la que se consideraba como agresión contra todos los países firmantes del acuerdo cualquier atentado de una nación no americana a la soberanía e independencia de un estado americano. Para vigilar el cumplimiento del acuerdo se creó en Washington el Comité de Paz Interamericano, integrado por Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos y México. Dos años más tarde, en enero de 1942 se constituyó en Río de Janeiro la Junta Interamericana de Defensa, compuesta por expertos militares y navales de 21 repúblicas americanas para estudiar y hacer las recomendaciones pertinentes para la defensa del continente, comenzándose a canalizar mediante la Ley de Préstamos y Arriendos una ayuda militar por valor de 400 millones de dólares, aprobada por el Congreso, de la que se beneficiaron las dos naciones que enviaron unidades militares en apoyo de los Estados Unidos, Brasil y México y otras que, como Bolivia, Chile, Perú y Venezuela, le proporcionaron importantes materias primas para su economía de guerra.

Finalizada la II Guerra Mundial, se firmó en Río de Janeiro, el 2 de septiembre de 1947, el *Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca* (TIAR), que desde entonces se ha venido considerando la base del Sistema de Defensa del continente y al año siguiente se crea el organismo político por excelencia, la *Organización de Estados Americanos* (OEA), mediante la *Carta de Bogotá*, firmada por todas las naciones del continente en la reunión de la IX Conferencia Panamericana, que tuvo lugar en la capital colombiana en abril de 1948. Sus fines son garantizar la seguridad del continente contra cualquier agresión y promover su desarrollo económico y cultural, fijándose su sede, como cabía esperar, en la ciudad de Washington.

Con la *Ley de Seguridad Mutua* del presidente Truman, en 1951, se pretendía establecer una ayuda militar a las naciones que participasen en misiones de defensa del continente, que se facilitarían a aquellas naciones que firmasen los llamados *Tratados de Seguridad Mutua* y los denominados Programas de Asistencia Militar. Excepto Argentina y México, que se negaron a firmar tales acuerdos, 18 naciones iberoamericanas se beneficiaron de dichas ayudas. Sin embargo, ello no quiere decir que los gobier-

nos hispanoamericanos estuviesen satisfechos de la conducta de Estados Unidos, pues finalizada la II Guerra Mundial no gozaron de ninguno de los beneficios del *Plan Marshall*, concebido exclusivamente para la reconstrucción de las economías de las naciones europeas aliadas, que se extendería a Alemania y que permitiría el renacimiento de la Europa Occidental. A sus ojos, los Estados Unidos solo se preocupaban de que los militares iberoamericanos tuvieran la instrucción y el material adecuado para hacer frente o neutralizar a los partidos comunistas que intentasen participar en la política activa. Esto se puso de manifiesto con ocasión de la intervención militar estadounidense en Guatemala, contra el presidente Arbenz, lo que llevó a algunos al convencimiento de que la ayuda económica y militar que se recibía era para que los ejércitos hispanoamericanos se convirtiesen en policías militarizadas, más que en unas fuerzas armadas capacitadas para defender sus países. En opinión del profesor Liuwen, el objetivo de los Estados Unidos era mejorar su seguridad, a través de la colaboración política iberoamericana, para evitar la influencia soviética. Por ello, fueron potenciando el papel político de los ejércitos de estas naciones, cuyos oficiales dominaban o influían en los partidos políticos y cuyos líderes, si pretendían gobernar, se veían forzados a pactar con las fuerzas armadas. A su vez, los programas de misiones militares eran un excelente instrumento para establecer relaciones directas con los responsables de los ejércitos, marginando a las autoridades civiles, y las armas que se facilitaban mejoraban la capacidad de hacer frente a los desórdenes públicos.

Crisis en el Sistema Interamericano de Defensa

Con la llegada al poder de Fidel Castro, el Gobierno norteamericano se encontró inopinadamente, a tan solo 200 kilómetros, con una amenaza que la Unión Soviética ponía ante sus costas, lo que llevó a potenciar su presencia militar en el Canal de Panamá y en la base de Guantánamo. El desastre de la Bahía de Cochinos, con el fallido desembarco de una fuerza contrarrevolucionaria en Cuba, y más aún la conocida *Crisis de los Misiles*, en octubre de 1962, forzaría al Presidente Kennedy a intentar mejorar su entendimiento con Iberoamérica y para materializarlo estableció la «Alianza para el Progreso», que comprendía una ayuda económica y tecnológica para impulsar el desarrollo de las naciones de la región e introducir la renovación del compromiso de defender a cualquier país miembro de la OEA cuya independencia estuviera en peligro. El fracaso en la forma de llevar a cabo los planes del presidente norteamericano y su asesinato impidieron la transformación que se pretendía incluir en el Sistema Intera-

americano de Defensa, puesto que, durante la década de los sesenta, una gran parte de las naciones hispanoamericanas estaban gobernadas por regímenes militares. A pesar de la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, se podía concluir que el principal problema o amenaza en la región no era el comunismo, sino la falta de un desarrollo económico, social y cultural para hacer frente a su penetración en las instituciones locales, en las aldeas y en los pueblos y así, poco más tarde, la revolución urbana se iría extendiendo a la República Dominicana, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El fracaso del Sistema Interamericano de Defensa se produjo por el agotamiento de los regímenes militares, incapaces de definir y llevar a cabo unos programas que ofreciesen un bienestar económico-social, con lo que se produjo una inestabilidad política que se prolongaría hasta bien entrada la década de los ochenta.

De esta forma, las naciones iberoamericanas se van dando cuenta de que la política de seguridad y defensa planificada para ellos por los norteamericanos es inviable para su idiosincrasia, su forma de ser y de pensar, por lo que inician un camino destinado a la independencia en su política exterior. La reforma del TIAR, que reconocía que los miembros de la OEA podían elegir libremente sus organización política, económica y social, y la admisión del pluralismo ideológico, el poder diversificar el abastecimiento del material para sus fuerzas armadas, establecer industrias nacionales de armamento y definir concepciones estratégicas diferentes a las norteamericanas son fiel reflejo del profundo cambio que se estaba produciendo en las naciones de la región y que a su vez impedirían la creación de una fuerza de paz regional, que venía siendo un deseo norteamericano. Al mismo tiempo, comienzan a surgir viejos fantasmas de un pasado que se creía superado, los conflictos fronterizos. Así, se plantean graves crisis entre Guatemala y Belice, Chile y Argentina, Venezuela y Colombia, Bolivia, Chile y Perú, en resumen hasta más de 30 situaciones conflictivas.

El fracaso de los regímenes militares, que estaba llevando a gravísimas situaciones político-económicas que nunca habían sido conocidas en el hemisferio, obliga a los Estados Unidos a volver sus ojos hacia la democracia, única alternativa para Iberoamérica. La política que inicia el entonces presidente Carter es retirar la ayuda militar a aquellas repúblicas en las que considera no hay respeto de los derechos humanos, entre las que incluye Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, lo que a juicio de éstas es otra forma de intervenir en sus asuntos internos, razón por la cual deciden incrementar la adquisición de armamento de Alemania,

Francia, Gran Bretaña e Israel, amén de potenciar sus industrias nacionales de material de defensa.

Por entonces, una circunstancia imprevista vino a afectar otra vez al Sistema Interamericano de Defensa, que estaba sumido en una grave crisis, la caída del régimen del presidente Somoza de Nicaragua que, al ser sustituido por una república de carácter marxista-leninista, amenazaba desestabilizar una zona clave para los Estados Unidos, Centroamérica. El presidente Carter, aunque logra que el Congreso apruebe una ayuda económica al nuevo Gobierno sandinista al objeto de impedir la «cubанизación» de la región y firma un acuerdo con Panamá, por el cual en el año 1999 se reintegraría a la soberanía de este país la zona del estratégico canal, no puede evitar que otra crisis venga a agravar la situación, la guerra civil en El Salvador y Guatemala. La concepción inicial de la política de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos para Iberoamérica había fracasado, pues las naciones del subcontinente sur, con su política multipolar, ya se atrevían a enfrentarse abiertamente con Washington, tal como ocurrió en la reunión de la OEA en 1979, en la que los ministros de asuntos exteriores se negaron a crear una fuerza interamericana de paz para ser enviada a Nicaragua.

El triunfo del partido republicano, que llevó al poder a Ronald Reagan, introdujo un cambio radical en la política norteamericana hacia Iberoamérica, en la que no parecía existir el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pues el nuevo presidente decidió actuar unilateralmente de una manera distinta en Centroamérica y el Caribe que en Suramérica. Para Estados Unidos, su atención se centra en las repúblicas centroamericanas, prestando poca atención a la situación en América del Sur, tal como ocurrió en el litigio argentino-chileno, en el que intervino la Santa Sede con un laudo papal e incluso apoyando política y materialmente a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas, en contra de lo establecido en el Tratado de Río de Janeiro. Así, se produce una pérdida de influencia norteamericana en la región y una práctica parálisis del Sistema Interamericano de Defensa, como se demuestra en la postura de las naciones iberoamericanas, que ya no se alinean de forma automática junto a Washington en los foros internacionales y en la adquisición de nuevos sistemas de armas, como misiles superficie-aire y aire-superficie, en los mercados europeos.

Los Estados Unidos practicaron en la década de los ochenta una política de presión en Centroamérica y el Caribe ignorando no solo el *Informe Kissinger* para la zona, basado en la ayuda económica para que los regímenes

civiles de la zona pudieran hacer frente a las crisis internas, sino actuando al margen del resto de las naciones iberoamericanas. Reagan decidió apostar por la Contra nicaragüense, creó una gran base militar en Honduras, invadió militarmente la isla de Granada, forzó unas elecciones no muy limpias en El Salvador y Guatemala y advirtió a la URSS que se abstuviese de enviar aviones de combate al gobierno de Managua. Ante la actitud de los Estados Unidos, los países del sur decidieron desarrollar su propia política de pacificación para Centroamérica, dentro de los foros iberoamericanos; así se concibieron el *Plan de Contadora* y la *Declaración de Esquipulas* de 1987, merced a una cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores y de Jefes de Estado de las naciones centroamericanas. A su vez, fue constituido un grupo de apoyo al que se unieron varios países de la zona.

Siguiendo esta nueva actitud, las principales naciones suramericanas comenzaron a establecer acuerdos subregionales y bilaterales sobre Seguridad y Defensa, por los que decidieron disminuir los efectivos de las fuerzas armadas y el nivel de armamentos, a fin de destinar parte de sus gastos militares a programas de inversión y desarrollo para conseguir un mayor crecimiento de su producto interior bruto. Así nació en 1986 lo que se conoce como Grupo de Río, considerado hoy día como el principal foro de concertación de Iberoamérica, integrado actualmente por catorce naciones, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, más Honduras y Guyana, países que ejercen la representación de Centroamérica y el Caribe respectivamente. En 1985, Argentina y Brasil firmaron la Declaración de Iguazu, por la cual pactaron la renuncia a la fabricación de armas nucleares, la desmilitarización del Atlántico Sur y la creación de medidas de cooperación y de confianza; y en el mismo año, Chile y Perú establecieron un acuerdo de cooperación militar. A su vez, la *Declaración de Antigua* de 1990, firmada por los cinco presidentes centroamericanos, contenía el compromiso de acordar y negociar la reducción y verificación de las fuerzas militares y de armamentos y crear las condiciones necesarias para mejorar el nivel de seguridad, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Esquipulas; e igualmente, en 1991, por el *Compromiso de Mendoza* entre Argentina, Brasil y Chile, al que se adhirieron Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, se prohibió con carácter general el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas. En el mismo año, los presidentes del *Grupo Andino*, integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, mediante la *Declaración de Cartagena* suscribieron su renuncia a las armas de destrucción masiva.

Las alianzas económicas

Una de las causas por la que los Estados Unidos se convirtió en una gran potencia e Iberoamérica se quedó notablemente retrasada es porque las primeras trece colonias del Este norteamericano se unieron para formar lo que ahora conocemos como Estados Unidos; mientras que los países al sur de Río Grande, después de la independencia, no solo no se unificaron, sino que se dividieron y enfrentaron entre sí. En este sentido, la cooperación en materia de política macroeconómica de las naciones iberoamericanas era una asignatura pendiente en el subcontinente, al tiempo que veían un posible modelo a seguir en la entonces Comunidad Económica Europea. Por ello, tres naciones del Cono Sur, Argentina, Brasil y Uruguay, crearon en 1986 lo que se conoce como MERCOSUR, que quedaba abierto a una posible incorporación de otros países de la región. El MERCOSUR representaba una población de casi 200 millones de consumidores y un PIB equivalente a 700 mil millones de dólares, lo que venía a suponer el 44 por ciento de los habitantes de Iberoamérica y el 54 por ciento del PIB total; y si bien en relación con el mercado mundial tales valores oscilaban alrededor del 3 por ciento solamente, representaba un paso decisivo en la integración económica de la zona.

En esta misma línea, en agosto de 1990 el presidente mexicano solicitó formalmente entrar en negociaciones de libre comercio con los Estados Unidos, a las que seis meses más tarde se uniría Canadá. De esta forma nacía el NAFTA o *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, que reconoce la globalización creciente y la interdependencia económica y vincula el comercio de bienes con el de servicios y los movimientos del capital. El calendario del desarme arancelario reflejaba la asimetría de México con sus dos industrializados vecinos del norte, toda vez que en aquel momento, aunque su economía era la segunda de Iberoamérica tras Brasil, ocupaba el decimoquinto puesto mundial por su producto interior bruto. Nacían así dos grupos económicos notables, aunque desde el primer momento los Estados Unidos intentarían vincular al MERCOSUR con el NAFTA, temerosos de que la Comunidad Europea se convirtiera en el principal cliente de los tres países iberoamericanos.

Por otro lado, en un intento de revitalizar la Organización de Estados Americanos, se acordó en la Asamblea General de 1991 apoyar el fortalecimiento del sistema democrático, la no injerencia e intervención en los asuntos internos y la revisión de las bases de la seguridad colectiva. Sin embargo, la OEA, que desde 1948 a 1969 había realizado una difícil, meri-

toria y exitosa labor en la pacificación de la América Central, fue excluida por la política del presidente Reagan de intervenir como mediadora en los conflictos habidos en esta región, a partir del derrocamiento de Somoza en Nicaragua; y en este sentido se puede recordar, por ejemplo, que en las negociaciones para alcanzar la paz entre El Salvador y Guatemala, la tarea mediadora fue hecha por las Naciones Unidas y no por la organización regional. De igual forma, la OEA no tuvo participación alguna en el último conflicto armado habido entre Ecuador y Perú; bastó la negativa del presidente Fujimori para impedir que la institución pudiera ofrecer sus buenos oficios o servir como intermediario en la conversaciones de paz; pero además, la Secretaría General no buscó otras alternativas diplomáticas ni tampoco hizo advertencia alguna a las partes de que podría utilizarse el uso de la fuerza, conforme a lo estipulado en el Tratado de Río de Janeiro.

Relaciones Unión Europea e Iberoamérica

Hasta 1985, las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica estaban caracterizadas por un tono tibio y secundario, una ausencia de política de cooperación, con excepción de la ayuda humanitaria y en la que las naciones iberoamericanas formaban parte del denominado grupo de países No Asociados. Del apoyo financiero y técnico, Asia recibía el setenta y cinco por ciento, mientras que a Iberoamérica solamente llegaba un escaso veinticinco por ciento. Pero con el ingreso de España y Portugal en la Comunidad, el uno de enero de 1986, se produjo un importante salto cuantitativo y cualitativo, que se puede englobar en dos grandes capítulos: el desarrollo institucional y diálogo político y el de la cooperación.

En este período, España ha ejercido dos Presidencias europeas, la primera en 1989 y la segunda en 1995, y Portugal una; por ello, Iberoamérica tiene hoy un protagonismo muy especial en la política exterior de la Unión Europea, impensable hace tan solo unos años; puede decirse que se ha producido un verdadero redescubrimiento de la región por parte de Europa, en el que las dos naciones ibéricas han jugado un papel importante. Cierto es que la adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea fue contemplada en un principio, al otro lado del Atlántico, con cierto recelo y preocupación, temiéndose posibles desviaciones de comercio; así como con poca esperanza, dado el poco peso específico de ambos países en el contexto internacional en aquel momento, pensándose en que poco podrían influir en la escasa relación euro-iberoamericana. Sin embargo, España trató, y con éxito, desde el primer instante, llamar la atención sobre Iberoamérica, su riqueza política y atractivo económico,

condiciones necesarias pero no suficientes si no hubieran coincidido en el tiempo con la transformación política y económica del continente. Además, España y Portugal, a través de las Cumbres Iberoamericanas, han contribuido en los últimos años a mostrar al resto de Europa la comunidad de valores que nos unen al continente.

En lo que al desarrollo institucional se refiere, se han revitalizado las *Conferencias de San José* que la Unión Europea mantiene con los países del istmo centroamericano, en las que participan Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, más Belice, Panamá, los quince de la Unión Europea y la Comisión, junto con los denominados países cooperantes, a saber Colombia, México y Venezuela. El denominado Diálogo de San José ha permitido a la Unión Europea jugar un papel transcendental en los procesos de democratización y de pacificación en la región, al tiempo que se han incrementado los recursos destinados por la Unión Europea a la cooperación con la zona.

Otro ejemplo que ilustra el incremento del diálogo con Iberoamérica es el de las relaciones con el *Grupo de Río*, que desde la Declaración de Roma de 1990 se han institucionalizado definitivamente; y a diferencia de las que se mantienen con Centroamérica, se propicia más el intercambio económico, comercial y tecnológico que la cooperación al desarrollo. La última reunión ministerial entre el grupo de Río y la Unión Europea tuvo lugar el 7 y 8 de abril de 1996, y en su Declaración Final se condenó la ley Helms-Burton y el terrorismo en todas sus formas, reafirmandose la voluntad de promover el desarrollo y la diversificación de los intercambios comerciales y de las inversiones entre las dos regiones.

En el marco de las relaciones políticas, hay que destacar el especial papel jugado por el Parlamento Europeo, que ha impulsado desde el principio el apoyo a la democracia y a los derechos humanos a través de los diferentes grupos políticos y que ha facilitado con su influencia el incremento notable del presupuesto de cooperación con la región. Como resultado de este diálogo, se han institucionalizado con carácter bienal las reuniones interparlamentarias e incrementado el protagonismo del Parlamento Europeo en todas las iniciativas, negociaciones y reuniones políticas con la Unión.

Además de incluir a la República Dominicana en el cuarto Convenio de Lomé, se han firmado *Acuerdos de tercera generación* con todos los países iberoamericanos, a excepción de Cuba, que contemplan elementos políticos como la cláusula democrática, nuevos ámbitos de cooperación

(medio ambiente, energía, investigación y desarrollo, etc.) y una cláusula evolutiva para mejorar su futuro. Finalmente, la Comisión tiene delegaciones en casi todas las capitales iberoamericanas y la Unión Europea goza del status de observador en la Organización de Estados Americanos y en otras instituciones regionales.

En el campo de la cooperación y de las relaciones comerciales, financieras y presupuestarias, en 1988 se obtuvo la división de la línea presupuestaria Países en Vías de Desarrollo, creándose una específica para Iberoamérica, incrementándose los recursos financieros entre 1991-1995 en más de un ochenta por ciento respecto al quinquenio anterior. De igual forma, el Banco Europeo de Inversiones ha aumentado los préstamos concedidos a diversos países de la zona por encima de los de Asia, alcanzando un 54 por ciento del total.

A su vez, se han fortalecido las relaciones con los países de la Comunidad Andina, firmándose en junio de 1996 en Roma una Declaración sobre el diálogo político y que incluye nuevas reuniones periódicas. Estos países, junto con los de Centroamérica, gozan de un régimen especial del Sistema de Preferencias Generalizadas en razón de su lucha contra el narcotráfico, lo que les permite exportar a la Unión Europea más del 90 por ciento de sus rubros libres de derechos y aranceles, si bien casi el 60 por ciento de las exportaciones iberoamericanas a la Unión entran ya libres de aranceles.

Junto a estas concesiones comerciales se han establecido programas innovadores de cooperación económica y de cooperación cultural, así como un instrumento financiero para la creación de empresas mixtas a través de operaciones capital-riesgo, con una dotación económica inicial de 20 millones de ecus anuales.

Para concluir, hay que señalar que, con motivo de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Madrid en diciembre de 1995, se aprobaron unos ejes prioritarios de la cooperación con los países iberoamericanos, recogidos en un documento titulado Conclusiones relativas a las orientaciones generales para la cooperación entre la Unión Europea e Iberoamérica 1996-2000.

Las Cumbres Iberoamericanas

La caída del Muro de Berlín y la desaparición de la guerra fría, con la disolución del Pacto de Varsovia, creaba una nueva situación en las relaciones

internacionales que, junto al ingreso de España y Portugal en la Comunidad Europea, propiciaba un mejor entendimiento y un mayor acercamiento entre las dos naciones ibéricas y las repúblicas del otro lado del Atlántico, unidas por la lengua, cultura, creencias y otros vínculos históricos y valores comunes.

Así, las naciones iberoamericanas, junto con España y Portugal, decidieron celebrar anualmente una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, deseosos de proyectar hacia el futuro la fuerza de la *Comunidad Iberoamericana*, cuya identidad está fundada en la idea de la dignidad e igualdad de sus diversas culturas y en una concepción integral y liberadora del hombre y de la sociedad como creadores de su destino, donde ni el racismo ni la xenofobia pueden tener cabida en sus comportamientos y actitudes. Con tal fin, en 1991 se celebró en Guadalajara (México) la I de dichas Cumbres, donde se expresó la intención de aprovechar en toda su plenitud las afinidades que unen a sus miembros para consolidar un espacio abierto a la cooperación y la solidaridad. Al año siguiente, y con ocasión del V Centenario, tuvo lugar en Madrid la II Cumbre, durante los días 24 y 25 de julio, abordándose asuntos relacionados con la concertación política, economía, integración y concertación, programas de cooperación en educación y modernización y desarrollo sostenible, social y humano, además de otros temas de interés. Un año más tarde tuvo lugar la III reunión en la ciudad brasileña de San Salvador de Bahía, que dio paso a la IV Cumbre, celebrada el 14 y 15 de junio de 1994 en Cartagena de Indias, donde asistieron todos los jefes de Estado y de Gobierno, a excepción del anciano presidente Balaguer de Santo Domingo. Ello era una muestra en los avances de estabilidad democrática, pues en Madrid no asistieron por crisis internas los presidentes de Colombia, Perú y Venezuela y en la de San Salvador de Bahía tampoco acudió el primer mandatario venezolano. En la ciudad colombiana se definieron tres ámbitos donde actuar con posiciones conjuntas, el internacional (donde se rechazaba el embargo norteamericano contra Cuba), el regional y el nacional, y se acordaron las sedes de las sucesivas cumbres, hasta el año 2001, que serían Argentina, Chile, Venezuela, Portugal, Cuba, Panamá y Perú. Los resultados de las diferentes Cumbres celebradas hasta la fecha, si no han alcanzado resultados tan espectaculares como se esperaba, sin embargo ofrecen unos balances muy positivos y que en el caso de España ha permitido profundizar y fortalecer las relaciones con esas naciones, con las que nos unen lazos tan estrechos.

Cambios en la política de los Estados Unidos

En diciembre de 1994 se celebró en Miami una *Cumbre* llamada *de las Américas*, de jefes de Estado y de Gobierno, a propuesta de los Estados Unidos, con la intención de introducir un cambio notable en las relaciones hemisféricas, preocupado por los éxitos que venían obteniéndose en las cuatro Cumbres Iberoamericanas celebradas hasta entonces, y por el incremento entre las de las naciones al sur de Río Grande y la Comunidad Europea. Allí se apreció la necesidad de organizar y establecer democracia, desarrollo económico y seguridad internacional. Con el fin de la guerra fría se había creado un ambiente sin precedentes para variar la manera de relacionarse en el continente americano, donde la democracia constituyese la mejor garantía para alcanzar los objetivos de paz, estabilidad, crecimiento económico y bienestar social y en el campo de la Seguridad y la Defensa se pudiera potenciar a la Organización de Estados Americanos, que podría crear el foro mas adecuado para discutir y acordar alternativas y líneas de acción, así como desarrollar el concepto de seguridad cooperativa. En la Cumbre de Miami se acordó una serie de principios que comprendía un Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad, Democracia, Libre Comercio y Desarrollo sostenible en las Américas, elaborándose un plan cuyos objetivos se concretaban en tres áreas principales:

- Preservar y fortalecer el sistema democrático en el continente.
- Erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio.
- Garantizar el desarrollo socioeconómico y conservar el medio ambiente para las generaciones futuras.

El espíritu generado en Miami pretendía introducir una profunda variación en las relaciones entre Estados Unidos y la comunidad iberoamericana, que era pasar de una política basada en unas relaciones con países considerados sumisos y satélites a otra en la que aparecieran como aliados.

Siguiendo las tendencias de la nueva política hemisférica, durante los días 25 y 26 de julio de 1995 se reunieron en la ciudad norteamericana de Williamsburg treinta y cuatro Ministros de Defensa con regímenes políticos abiertos, con la finalidad de crear una alianza democrática para la seguridad cooperativa continental y establecer áreas de cooperación, basados en tres conceptos, democracia, control civil de las fuerzas armadas y acción bajo normas constitucionales. Una de las causas que venían causando tensiones en Iberoamérica eran las disputas fronterizas, por lo que si las posibles soluciones eran abordadas regionalmente se podría evitar que pudieran ser impuesta por la fuerza por una de las partes en conflicto;

por ello se recomendaba inicialmente establecer conversaciones bilaterales para finalizar las posibles controversias, basadas en el respeto al derecho internacional. Por ello, el enfrentamiento militar habido a principios de 1995 entre Ecuador y Perú puede considerarse como uno de los factores que más influyó en la celebración de esta reunión de Ministros de Defensa. Durante los meses de enero y febrero de ese año, unidades militares de ambos países, con el apoyo de armamento pesado y de aviones de combate, se enfrentaron por el control de una estrecha franja de territorio en torno al valle del río Zenepa, en plena cordillera andina, vieja reivindicación ecuatoriana desde la Guerra con Perú en 1941. La mediación de los países garantes del Grupo de Río, a través de la misión de observadores integrada por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, jugó un papel decisivo en el alto el fuego entre ambos bandos, que firmaron un acuerdo por el cual se comprometieron a desmilitarizar la zona como consecuencia del espíritu que imperó en Williamsburg.

En Williamsburg, además de evitar confrontaciones en temas de seguridad, se buscó crear confianza para avanzar hacia una nueva alianza en el hemisferio, donde el papel de la transparencia se destacaba como esencial. Aunque no hubo una declaración final, como consecuencia de esta primera reunión de Ministros de Defensa los Estados Unidos definieron unos principios en su política hacia Iberoamérica, contenidos en un documento elaborado por Joseph Nye que se dio a conocer en septiembre de 1994:

- Reafirmar el compromiso de consolidar la democracia, basado en la seguridad hemisférica.
- Reafirmar el apoyo de las fuerzas armadas hacia la democracia.
- Sometimiento de las fuerzas armadas a la autoridad civil.
- Aumento de la transparencia en la cooperación de defensa.
- Definición de objetivos para la solución de conflictos, en base a medidas de confianza.
- Promoción de una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y participación en misiones internacionales de paz.

El diálogo iniciado en Williamsburg sería continuado en Santiago de Chile, donde el 10 de noviembre de 1995 se celebró la *Conferencia Regional para el Fomento de Medidas de Confianza*, pues había que reconocer que los recelos mutuos habían caracterizado las relaciones bilaterales y hemisféricas durante décadas, ya que el concepto iberoamericano de la soberanía nacional estaba fundamentado en el derecho internacional, por lo que históricamente tenía un carácter esencialmente defensivo, lo que obligaba

a una constante búsqueda de seguridad y protección frente a las asimetrías continentales y a las notables diferencias de poder existentes en la región. Así mismo, en Santiago se destacó como elemento fundamental de la contribución hemisférica a la causa de la paz y la seguridad el Tratado de Tlatelolco, cuyas estipulaciones sobre la proscripción de armas nucleares habían convertido a Iberoamérica en la primera zona del mundo libre de armas nucleares. Igualmente, la ratificación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, suscrita en 1972, y de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, suscrita en 1992, el avance en las negociaciones sobre armas de destrucción masiva, limitación de armamentos convencionales y prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y la conclusión para 1996 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares venían a contribuir a un ambiente internacional más seguro. Por ello, en la capital chilena se acordaron, entre otras, las siguientes Medidas para el Fomento de la Confianza:

- Adopción gradual de acuerdos sobre notificación previa de maniobras y ejercicios militares.
- Intercambio de información y participación en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares.
- Promoción del desarrollo e intercambio de información relativo a las doctrinas y políticas de defensa.
- Consideración de un proceso de consultas con vistas a la limitación y control de armas convencionales.
- Acuerdos de invitación de observadores a maniobras y ejercicios militares, visitas a instalaciones e intercambio de personal civil y militar para entrenamiento convencional y avanzado.
- Desarrollo y establecimiento de comunicaciones entre autoridades civiles y militares de países vecinos conforme a sus situaciones fronterizas.

Tan importantes como las medidas acordadas era el compromiso de ser constantemente revisadas, verificadas y aumentadas. Por supuesto, necesitan ser llevadas a la práctica, puesto que los esfuerzos de desmilitarización, transparencia y adquisición de armamentos son fundamentales para incrementar la seguridad cooperativa en la región.

Iberoamérica hoy

Amenazas y riesgos para Iberoamérica

La percepción de los riesgos y amenazas que pueden afectar a Iberoamérica es muy distinta si las evaluaciones son realizadas por el Pentágono, por organismos europeos, tal como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, o por los propios países iberoamericanos.

De acuerdo con el informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, presentado ante la Comisión de Defensa del Congreso este año y que ha servido para elaborar el *Quadrennial Defense Review*, los riesgos y amenazas actuales y de comienzos del siglo XXI que pueden afectar a Iberoamérica son: el narcotráfico, el blanqueo de dinero, el contrabando de armas, la inmigración ilegal y los fenómenos subversivos localizados. Esta apreciación puede parecer razonable a los ojos de los analistas norteamericanos, pues con solo el cinco por ciento de la población mundial consume el 50 por ciento de toda la droga que se produce en el planeta, y a su vez, el blanqueo del dinero obtenido por los narcotraficantes permite a estos grupos mafiosos obtener modernos sistemas de armas y mejores que los de las fuerzas de seguridad iberoamericanas, lo que además sirve para favorecer la aparición de fenómenos subversivos o potenciar los ya existentes. Igualmente, es natural que las constantes inmigraciones clandestinas mexicanas supongan para ellos un motivo de honda y profunda preocupación. Como dice el mexicano Jose Luis Piñeyro en un artículo recogido en la Crónica Legislativa de la Cámara de Diputados de su país, en noviembre de 1996, «en sentido estricto, es obvio que México representa una amenaza múltiple a la seguridad norteamericana con el terrorismo latente del EPR, el creciente narcotráfico internacional, nuestras continuas migraciones a su territorio e incluso el movimiento fundamentalista o indígena de Chiapas, a lo que habría que sumar nuestra crisis económica»; pero irónicamente añade que si bien «las presiones norteamericanas no se harán esperar, sin embargo no serán para fortalecer nuestra democracia, pues en Washington siempre han preferido la estabilidad a la democracia».

En el *Strategic Survey 1996/97*, el IISS de Londres, al referirse a Iberoamérica («Security Versus Democracy in Latin América») dice que la seguridad, la democracia y el crecimiento económico continuarán conformando la política en la región, y cita al narcotráfico como el principal riesgo para el subcontinente, toda vez «que ha permitido el aumento del crimen orga-

nizado, del terrorismo y de las acciones violentas»; pero considera que el principal desafío es la «corrosiva influencia de la corrupción», como primer obstáculo para la consolidación de la democracia. «El incremento del narcotráfico ha condicionado la política militar y de ayuda a dichas naciones», continúa el documento, pues «los programas de asistencia para fortalecer la seguridad anticomunista de los últimos treinta años han sido sustituidos por otros contra el tráfico de drogas, lo que ha creado graves tensiones entre Washington y sus vecinos, ya que con esta política en muchos casos se ha debilitado a la autoridad civil y a las fuerzas policiales en beneficio de unas fuerzas armadas educadas y adiestradas en la lucha contra el comunismo y la subversión».

En otro clásico documento del conocido Instituto, el *Military Balance 1987-1988*, se menciona como «el más importante riesgo para las fuerzas de seguridad de Iberoamérica a los grupos guerrilleros, hoy con menor base ideológica, pero más unidos al narcotráfico y al crimen organizado», así como que permanecen aún diferencias bilaterales entre algunos estados por problemas limítrofes; pero considera que, en el momento presente, estas crisis potenciales se encuentran en un nivel bajo, aunque a veces se produzca algún pequeño enfrentamiento aislado. Para el citado Instituto, la inmigración ilegal es el tercer riesgo que se cierne sobre la región y denuncia que otro factor a tener presente es la corrupción existente en las fuerzas de seguridad y policiales. En opinión de los analistas del IISS, aunque admiten que el control político de las fuerzas armadas prosigue afirmándose, algunas de ellas continúan organizadas y equipadas para hacer frente a unas amenazas exteriores en franca disminución y critican que los gastos militares tienen más que ver con el mantenimiento del «status» de los ejércitos y su prestigio que con la reorganización y equipamiento necesarios para hacer frente a grupos internos armados, crimen organizado y el narcotráfico. Continúa afirmando que, en este sentido, las operaciones contra tales amenazas exigen un alto nivel de entrenamiento, moral y buenos servicios de inteligencia, más que la adquisición de costosos sistemas de armas y que se dedican excesivos recursos a sueldos de personal en activo y retirado y en armamentos poco apropiados para las operaciones a realizar contra las amenazas antes señaladas. Esta mala distribución de los recursos militares, concluye el análisis, hace que la entidad de las fuerzas a utilizar contra los grupos armados paramilitares esté sobredimensionada.

En un documento publicado en marzo de 1997, bajo el título «Paz y Seguridad para Iberoamérica», el fallecido Joaquín Tacsan, que fue director de

la Fundación Arias, «Armas para la Paz y el Progreso Humano» de Costa Rica, define los riesgos y amenazas que pueden afectar negativamente a la progresiva estabilidad política de la zona. En su opinión, la Seguridad se ve seriamente amenazada por los altos niveles de criminalidad existentes, donde esquemas muy bien concebidos para extorsión y secuestros encuentran un terreno abonado, en particular en aquellas naciones con fuerzas policiales débiles y con una generación de jóvenes sin empleo. Advierte que se ha creado, en algunos casos, un vacío en el cometido de las fuerzas armadas al ser apartadas de su papel tradicional —los problemas internos de seguridad— y que aunque los militares no tengan ya a su cargo el mantenimiento del orden público, al no existir unas fuerzas policiales efectivas ni una sociedad organizada para enfrentarse a la situación, aquellos se resisten a perder su protagonismo.

Tacsan considera a las vieja disputas fronterizas como segundo riesgo para la paz en Iberoamérica y recuerda algunas, como la existente entre Ecuador y Perú, que se reabrió en 1995, Honduras y El Salvador, Honduras y Nicaragua, Colombia y Venezuela, Perú y Chile y Venezuela y Guyana, entre otras. También señala que la entrada en vigor de la Ley del Mar en 1992 vendrá a agravar estos problemas por diferencia sobre límites de aguas y zonas económicas exclusivas. En tercer lugar sitúa a la Desmovilización, por la falta de una apropiada integración social de soldados y excombatientes, principalmente en Centroamérica, cuya cifra estima rebasa los ochenta mil, número que se incrementará tras el acuerdo de paz alcanzado en Guatemala. Para Joaquín Tacsan existe un cuarto riesgo, la indefinición de la misión de las fuerzas armadas, en concreto en América Central, que venían disfrutando de privilegios muy antiguos y con recursos muy considerables, que les han permitido adquirir o participar en empresas públicas ahora privatizadas. Igualmente advierte que la mencionada indefinición está llevando a que los militares participen, o lo pretendan, en la lucha contra el narcotráfico, seguridad interna, control de fronteras, protección del medio ambiente y otros cometidos propios de las fuerzas policiales y de las organizaciones civiles. Finalmente, apunta que el narcotráfico y el tráfico de armas son una grave amenaza, pues a través del blanqueo de dinero pueden influir y penetrar en los procesos electorales y comprar votos y políticos influyentes e igualmente adquirir costosos sistemas de armas y de comunicaciones más modernos que los de las propias fuerzas militares y policiales.

En unas Jornadas sobre «Presente y Futuro de las Fuerzas Armadas en Iberoamérica», que tuvieron lugar en el Centro Superior de Estudios de la

Defensa Nacional (CESEDEN), en febrero de 1996, el director de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa de Colombia, general Bonett, definió cinco amenazas que considera son comunes a todos los países del subcontinente: corrupción administrativa, narcotráfico, narcoterrorismo, delincuencia organizada y delincuencia común. Para el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, general Carrión, otro grave factor es la agresión al medioambiente, en especial a las reservas tropicales, y el desminado de los cien mil artefactos dispersos por todo el país como secuela del conflicto habido durante la pasada década. En opinión del general Barboza, director de la escuela de Altos Estudios de la Defensa de Venezuela, para su país el principal peligro es la subversión interna, después de los dos intentos de golpe de estado que sufrió en 1992, y que aún queda alguna zona caliente, tal como ocurre en el área andina. Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en asignar nuevas funciones a las fuerzas armadas, en un momento en que los conflictos bélicos son cada vez más remotos, entre las que podían estar la participación en misiones humanitarias y de paz, además de la propia y esencial, garantizar la seguridad y soberanía nacional.

Según opina Francisco Rojas Aravena, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile, en un trabajo preparado para el primer Congreso Latinoamericano de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz, celebrado en Guatemala, el principal peligro para Iberoamérica pudiera provenir de la regresión desde situaciones de democracias frágiles hacia regímenes autoritarios, así como de la consolidación de los procesos de reforma en lo económico, político y social. Esto requiere la introducción de profundos cambios estructurales, lo que podría ocasionar fuertes tensiones sociales y la existencia de un liderazgo capaz de establecer las condiciones de gobernabilidad. Siguiendo su exposición, el investigador chileno recuerda que la región se encuentra en un período caracterizado por un segundo ajuste estructural, ya que las reformas democráticas básicas ya han sido establecidas y las económicas fundamentales se encuentran en ejecución. Concluido el primer ajuste, las naciones iberoamericanas se encuentran ante un importante reto, la modernización del estado. En su opinión, la región se enfrenta a antiguos y graves desafíos, tal como es el fantasma de enfrentamientos militares nacido de viejos problemas de delimitación de fronteras, lo que pone de relieve que «la democracia no es suficiente para generar un clima que propicie la paz». Por ello, cree que el Grupo de Río, que se constituyó como el principal lugar de encuentro de las democracias iberoamericanas, al no

asumir los temas de la seguridad internacional y la defensa perdió peso y fuerza en el diálogo con otras regiones del mundo. Rojas Aravena añade, como otros riesgos, los problemas migratorios, el tráfico internacional de estupefacientes, la agresión al medio ambiente, los temas vinculados a las relaciones cívico-militares y su impacto sobre los derechos humanos y la democracia y la herencia de la guerra fría en las relaciones con Cuba.

Con los nuevos desafíos a la Seguridad Nacional, como dice Benítez Manaut, desaparece el enemigo interno como sujeto político y aparece el enemigo interno como sujeto económico y social, la pobreza. De igual manera se desvanece el enemigo externo político, el comunismo y aparecen otros como los nacionalismos, ideologías y religiones excluyentes y fundamentalistas, provenientes de la influencia de conflictos en Oriente Medio, Centro Europa y Norte de Africa. Ello ha modificado la relación tradicional existente entre Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, las cuales están viviendo procesos de reforma y reestructuración muy profundos. Hay países donde su influencia política, sus funciones, misiones y efectivos se han visto reducidos; entre los que están Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Panamá —donde ha desaparecido como institución— Nicaragua y próximamente Guatemala. En segundo lugar están aquellos donde las fuerzas armadas han crecido en influencia debido a desafíos producto de la ingobernabilidad real y potencial, como México, Perú y Venezuela. En el primero, la causa es la aparición de grupos armados con ideología fundamentalista-indigenista y de acción terrorista; y en el caso de México y Venezuela, a los cambios que están sufriendo sus sistemas políticos de gobierno, donde se producen fenómenos de ingobernabilidad. Por otro lado, hay naciones donde sus funciones han variado muy rápidamente, toda Centroamérica (donde se tiende a un esquema subregional de seguridad colectiva), en Brasil, México y los países andinos; y en cuarto lugar, hay otras donde se ha producido un cambio profundo a nivel de doctrina e institucional, tal como Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Es decir, los países que viven procesos de desmilitarización reducen sus efectivos y los militares han dejado de tutelar políticamente a los poderes del estado, mientras que en los que tienen procesos de militarización, se debe al deterioro de su seguridad por factores ya anteriormente señalados. Podemos concluir que quizás el desafío más importante a la Seguridad Nacional de Iberoamérica sea el de la *viabilidad nacional*.

El *Sínodo de obispos de América*, convocado en Roma por el Papa Juan Pablo II, en noviembre de 1997, ha denunciado el grave problema de la corrupción como una de las más importantes lacras de los países iberoa-

americanos y advirtió que el problema de la deuda no se resolverá hasta que no sea ganada la batalla contra la corrupción. Los obispos en el Sínodo han prestado una gran atención a la deuda, por el gran impacto que tiene sobre los pueblos y también expresaron su preocupación porque los préstamos que conceden los grandes organismos financieros internacionales no repercuten en los más desfavorecidos y necesitados, «sino que van a engrosar las arcas de los corruptos»; por ello instaron a las naciones ricas a renovar sus esfuerzos para que Iberoamérica pudiera acabar sus deudas para el año 2000. El arzobispo de Honduras, Rodríguez Madariaga, presidente de la Conferencia episcopal iberoamericana, dijo que «el objetivo será obtener el perdón de las deudas contraídas por numerosos países iberoamericanos, (los casos mas graves son los de Brasil y México) y que el resto pueda ser renegociado». Por su parte, el cardenal norteamericano Roger Mahony, de Los Angeles, criticó a su país por el levantamiento de las restricciones de venta de armas y denunció la «cruel realidad» de que muchas naciones iberoamericanas utilicen sus escasos recursos para adquirir costoso e innecesarios armamentos en la zona. El Sínodo advirtió de la gran penetración de las sectas en muchos de los países de la región, que consideró tan grave como el narcotráfico, pues se está convirtiendo en una droga que traerá, de no impedirse, nocivas consecuencias para la sociedad iberoamericana.

Disminución de los gastos militares

Desde comienzos de la década de los 90, Iberoamérica es la región del mundo donde se viene experimentando una mayor disminución de los gastos militares. Para el *Fondo Monetario Internacional*, los gastos de seguridad y defensa se redujeron hasta alcanzar el 1.2 por ciento del producto interior bruto, dato que lo confirma el Instituto para la Paz. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, aunque admite esta tendencia a la baja difiere en los valores señalados anteriormente, puntualizando que los presupuestos de defensa de estas naciones fueron del 19 por ciento en 1995 y del 1.8 por ciento en 1996. El IISS lo achaca a la falta de transparencia en la información sobre dichos gastos y considera que existen dificultades para su control en la región, a diferencia de la facilidad en obtener datos económicos y financieros de las administraciones civiles.

Existen progresos notables en el compromiso adquirido en la *Declaración de Santiago sobre el Fomento de Medidas de Confianza* para el intercambio de información y participación de todos los estados miembros de la OEA en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en

el Informe Estandarizado Internacional sobre gastos militares, lo cual se está poniendo en la conferencia anual de Ministros de Defensa. Igualmente, en la reunión de la OEA celebrada en Lima, en junio de 1997, se adoptó una resolución para notificar previamente cuando se vayan a adquirir sistemas de armas avanzados. De llevarse a la práctica, supondría una potenciación importante del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, que exige solamente la notificación a «posteriori».

Esta tendencia facilitará una mayor responsabilidad y transparencia en la adquisición de armamentos y permitirá la puesta en práctica de la decisión norteamericana, adoptada el 31 de julio del presente año, de suavizar las restricciones de los Estados Unidos a las ventas de sistemas de armas convencionales avanzados en la región. Con tal motivo, empresas estadounidenses han sido ya autorizadas para iniciar conversaciones con Chile a fin de reemplazar los anticuados aviones de combate.

Según el IISS, el Fondo Monetario Internacional, que concede créditos y préstamos a Iberoamérica más frecuentemente que a cualquier parte del mundo (quince mil millones de dólares de un total de cuarenta y un mil millones a marzo de 1997), es incapaz de contabilizar, en su momento, los informes de defensa de sus clientes. En su última edición, correspondiente a 1996, del Anuario Estadístico y Financiero de los estados miembros, el FMI daba a conocer los gastos de defensa de cinco naciones iberoamericanas, lo cual es criticado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que en su Balance Militar aporta los datos de 28 naciones de la zona. Para el citado Instituto, la falta de transparencia es particularmente evidente en lo que se refiere a fuerzas paramilitares, pensiones para personal militar retirado, subsidios a la industria de la defensa y recursos extrapresupuestarios de carácter militar. La financiación de las fuerzas paramilitares, por ejemplo, pueden estar incluida en el presupuesto del Ministerio de Defensa o en el del Interior; sin embargo, para el FMI esta política carece de relieve. Para el IISS, también la respuesta regional al informe anual de las Naciones Unidas sobre gastos militares es así mismo pobre, pues reproducen los mismos datos que facilitan al FMI; sin embargo, en algunos aspectos, Chile es considerado un ejemplo de transparencia en la región, a pesar de sus informes todavía no muy completos, tanto al FMI como a las Naciones Unidas, aunque detalles sobre los gastos de defensa son publicados en los medios de comunicación nacionales. Efectivamente, y tal como puede apreciarse en su primer Libro Blanco de la Defensa, los gastos militares están identificados y separadas aquellas partidas destinadas a financiar adquisiciones de material proce-

dentes de la empresa estatal del cobre, CODELCO, o las pensiones militares que son imputadas al presupuesto de la Seguridad Social. Los efectos positivos de esta transparencia han permitido al gobierno chileno neutralizar las acusaciones de algunos países de la región, que le imputaban excesivos gastos militares, cuando algunos de ellos invierten más en el área de defensa de lo que sus presupuestos indican.

Aunque el comercio internacional de armamentos había venido decreciendo desde 1987, en 1995 experimentó un fuerte repunte, en torno al 13 por ciento, incremento que en 1996 fue del 6 por ciento. Entre los factores que han contribuido a este cambio de tendencia está la modernización, por el momento moderada, de las fuerzas armadas de ciertos países iberoamericanos. De acuerdo con informaciones oficiales de las naciones, informes de la Agencia para el Control de Armamentos y el Desarme de los Estados Unidos, ACDA, y los Servicios de Investigación del Congreso norteamericano, CRS, facilitados en 1997, la adquisición de armamentos en Iberoamérica, que hace diez años representaba el 6 por ciento del comercio mundial de armas, fue descendiendo progresivamente hasta el 2.1 por ciento en 1993, alcanzando un valor total de tan solo 775 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras han experimentado un alza en 1995 y 1996 para pasar a ser el 4.1 por ciento del mercado mundial, que representan 1.600 millones de dólares. En este mercado hay cuatro naciones iberoamericanas exportadoras de armamento, que en orden creciente son Chile, México, Argentina y Brasil, alcanzando este último, según las fuentes citadas, entre 1987 y 1996 una cifra de ventas de 2.260 millones de dólares.

En lo que se refiere al *Tratado de Prohibición de Experimentos de Armas Nucleares*, el 10 de julio de 1997 solamente 44 naciones de las 144 firmantes lo habían ratificado, entre las que estaban Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú; y en junio de este año, Brasil pasó a convertirse en el 186 miembro del *Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares*.

Por otro lado, un grupo de expertos de 25 naciones se ha venido reuniendo a lo largo de 1997 para revisar la efectividad y los logros del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y examinar las diversas formas de implementar el mismo. Entre los países que han manifestado su voluntad de cooperación y de ofrecer voluntariamente toda la información propia se encuentran Argentina, Brasil y México. Este Registro comprende siete categorías de armas convencionales consideradas principales, carros de combate, vehículos de combate blindados, artillería de calibre

igual o superior a 100 mm., aviones de combate, helicópteros armados, barcos de guerra de más de 750 toneladas y misiles de alcance superior a los 25 kilómetros y sus lanzadores.

Solamente Argentina es la nación iberoamericana signataria del Acuerdo de Wassenaar, firmado en julio de 1996 por el se constituyó un sistema voluntario para coordinar los controles nacionales de exportación de armas convencionales y las tecnologías de doble uso y promover un foro consultivo de intercambio de información. Finalmente, conviene señalar que Argentina y Brasil son los dos único países iberoamericanos miembros del Régimen de Control de Tecnología de Misiles, que fue creado en abril de 1987, con el fin de controlar la transferencia de equipos y tecnologías que pueden permitir la fabricación de misiles capaces de transportar armas nucleares.

Desde el punto de vista socio-económico es muy satisfactorio el informe facilitado por la Organización Mundial de Comercio en el que se reconoce la recuperación de la economía en Iberoamérica cuyo crecimiento en 1997 se ha acentuado, superando a los índices medios del período 1990-1995 y que se calcula alcance el 7 por ciento.

Las naciones iberoamericanas en 1997

En Centroamérica hay una percepción general sobre tres graves amenazas comunes a la región: el narcotráfico, el crimen organizado y la agresión al medio ambiente, aunque como es natural con matizaciones nacionales. *Guatemala* no es solo país de tránsito sino también un importante productor de marihuana, y ahora también de heroína; y si bien no se tiene la convicción de una intervención militar norteamericana, tal como ocurrió en Panamá, sí existe la idea de que podrían darse fuertes presiones de Washington para erradicar el tráfico de drogas. *El Salvador*, que no siguió el camino mexicano y estadounidense de declarar ilegal el problema de la droga, no desea que el ejército tenga responsabilidades en este terreno, por el posible efecto corruptor sobre las fuerzas armadas. El narcotráfico tiene una presencia significativa en *Honduras*, particularmente en las Islas de Bahía y en las zonas norte y noroeste del país. La reducción de las fuerzas armadas en *Nicaragua* ofrece grandes posibilidades al mercado de la droga para sus operaciones puente a los consumidores del norte. El alto nivel de desarrollo de *Costa Rica* ofrece mucho atractivo para el narcotráfico y está claro que muchas actividades vinculadas a los traficantes se realizan en su territorio a lo largo de sus costas, mientras que en *Panamá*,

disueltas las fuerzas armadas por los Estados Unidos a raíz de su intervención militar con la operación «Causa Justa», se es consciente de la falta de medios para combatir esta amenaza, aunque también consideran que deben unir sus esfuerzos a la lucha internacional para erradicarla. La criminalidad y la delincuencia constituyen un grave asunto en la seguridad interna de estos países, que se han visto incrementadas notablemente en la zona, achacándose el origen del problema en *El Salvador, Honduras y Nicaragua* a una desmovilización muy rápida, mal planeada y sin proporcionar a los desmovilizados las ayudas económico-sociales apropiadas, así como a la existencia de armas en el mercado negro a precios muy bajos. En lo relativo a la agresión al medio ambiente, todos la valoran como un problema creciente, tal como por ejemplo ocurre en Guatemala, donde cada año se pierde el uno por ciento de la superficie de los bosques del Petén.

Pero cada nación tiene una visión propia de otros riesgos diferentes. Para *Guatemala* son el desbordamiento de la situación de Chiapas y el peligro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El problema de Chiapas es temido en este país, donde aproximadamente la mitad de la población es indígena y mucha de la otra parte lo es culturalmente, por lo que está considerado como la amenaza número uno, ya que también existen inquietudes del posible estallido de una lucha intra-étnica y a la que ya se le denomina «etnoterrorismo». Por otro lado, los guatemaltecos, tras el ingreso de México en el NAFTA, se consideran ahora frontera con los Estados Unidos, razón por la que se sienten incómodos y preocupados por esta proximidad norteamericana. Una tercer amenaza directa actual, en el ámbito interno pero más remota, pudiera ser el incumplimiento del Tratado de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la guerrillera URNG o Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, lo que no parece probable.

En la VI Cumbre Iberoamericana, celebrada el año pasado en Santiago de Chile, el presidente Guatemalteco Alvaro Arzú invitaba a todos los mandatarios asistentes a presenciar, el 26 de diciembre del año 1996, la firma del acuerdo de paz con la URNG que pondría fin al último conflicto armado en Centroamérica. El 24 de octubre de este año, el presidente Arzú y el Secretario de la UNRG recibieron en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación. Durante este año, la nación está aprendiendo a vivir y convivir poco a poco, cerrando las heridas y dejando atrás los sufrimientos del sangriento enfrentamiento civil, pero las relaciones entre el Gobierno y la antigua guerrilla no son tan fáciles, si bien la UNRG, siguiendo el camino de otras organizaciones similares centroamericanas,

se ha convertido en una fuerza política que aspira a ser la voz mayoritaria de la población indígena, y en marzo de 1997 comenzó la desmovilización de sus fuerzas. Por su lado, el Gobierno está cumpliendo escrupulosamente los compromisos del tratado y en mayo de 1997 anunció el comienzo de la desmovilización de 5.000 soldados y la reducción de hasta 11.500 destinos en la organización de las fuerzas armadas. La economía va paralela a la situación política y el Banco Americano de Desarrollo ha concedido una ayuda de 500 millones de dólares para apoyar la reconstrucción del país.

En *El Salvador* existe el temor de un conflicto armado con Honduras y se citan los problemas derivados de los refugiados como temas no resueltos, mostrando también su preocupación por las posibles perspectivas del NAFTA en el campo de la seguridad y considerando como un tema importante la inmigración ilegal. Las elecciones legislativas y municipales celebradas el 17 de marzo de este año, en las que 2 millones y medio de electores estaban convocados en las urnas para elegir 84 diputados de la Asamblea y los 262 alcaldes del país, han supuesto un examen para el partido gubernamental Arena del presidente Calderón Sol y una prueba para la antigua guerrilla del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, convertida en el partido político de la izquierda. El resultado permitió que Arena continúe gobernando, pues consiguió un escaño más en la Asamblea Legislativa, pero el hecho de que el FMLN haya recibido un fuerte respaldo como fuerza política, al vencer en la Alcaldía de la capital, obligará al Gobierno a una política de concertación que tenga presente las reivindicaciones de la izquierda. En *Honduras* se mantiene cierto recelo con respecto a El Salvador, con el que se han superado los conflictos habidos a comienzos de este año y se percibe la sensación de que la inestabilidad en Nicaragua aún puede suponer un cierto riesgo. El presidente Roberto Reina es uno de los más acérrimos defensores de impulsar la integración en Centroamérica y del respeto de los Derechos Humanos, exigiendo al poder judicial que investigue las posibles violaciones de los mismos habidas durante la dictadura. De igual forma, ha iniciado la lucha contra la corrupción y se investiga por estas causas al anterior presidente y hoy líder de la oposición, por las presuntas responsabilidades cuando estuvo en el poder. El 1 de diciembre de 1997 se celebraron las quintas elecciones generales consecutivas desde la instauración del proceso democrático en 1982 y que tienen lugar cada cuatro años. En los comicios, considerados los más limpios de los últimos años y ante más de cien observadores internacionales, resultó vencedor Carlos Flores Facussé,

ingeniero y empresario y actual Presidente del Congreso, al que sus detractores le acusan de ser «demasiado amigo» de los Estados Unidos. Flores, pertenece al Partido Liberal que dirige el actual presidente Carlos Roberto Reina y ofreció, tan pronto fue proclamado vencedor, formar un gobierno de conciliación nacional con participación de todos los partidos. La investidura presidencial tendrá lugar el 27 de enero de 1998. Los partidos minoritarios, los llamados emergentes, no lograron romper el tradicional bipartidismo existente, que caracteriza la vida política del país, dividida entre los liberales o rojos y los nacionalistas o azules, estos últimos encabezados por Nora de Melgar, apodada por sus adversarios como la maestra, por ser profesora de enseñanza primaria. Desde el punto de vista económico-social, el paro supera el catorce por ciento, aunque el número de desempleados es mucho mayor y la pobreza se extiende por gran parte del territorio. Sin embargo, el crecimiento económico ha alcanzado el cuatro por ciento y otro dato macroeconómico, la inflación, fue negativa en octubre de 1997, lo que unido a la política de privatizaciones de las empresas estatales augura una mejora de la situación del país.

En *Nicaragua* no se perciben amenazas internacionales, excepto la proveniente de una posible intervención norteamericana; en cambio, la mayor preocupación es la grave crisis que vive su pueblo por los graves problemas económicos que la nación afronta, la falta de asistencia prometida por Washington y el nivel de destrucción provocado por unas guerras que se han prolongado durante 20 años. El gobierno intenta reactivar la economía de país, pues Nicaragua está en este campo a la cola de las naciones iberoamericanas, pero las diferencias con el frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantienen una presencia significativa en el Congreso, dificultan los intentos del nuevo presidente Arnaldo Alemán, cuya toma de posesión tuvo lugar el 10 de enero del presente año. En las elecciones generales celebradas el 10 de octubre de 1996, Alemán, al frente de la Alianza Liberal, obtuvo 42 de los 93 asientos del Congreso, pero los Sandinistas se presentaron divididos en dos grupos, uno con el antiguo vicepresidente Sergio Ramírez y otro liderado por Daniel Ortega. De todas formas, los Sandinistas controlan los sindicatos, tienen una gran influencia en las fuerzas armadas y en la policía, en los ayuntamientos y en todo el conjunto social. Por ello, durante todo 1997 se ha venido desarrollando un intenso diálogo entre el Gobierno y el FSLN en la búsqueda de un acuerdo sobre la propiedad de la tierra, puesto que durante el sandinismo se produjo una dura expropiación de la que se beneficiaron sus dirigentes; pero hay también millares de campesinos cuyo único medio de vida es un

pedazo de tierra, por lo que cientos de familias y de jóvenes se encuentran en las calles de Managua sin empleo, lo que significa una continua y potencial amenaza de la frágil paz social que se vive en esta atormentada nación. El 3 de septiembre, los jefes de Estado y de gobierno centroamericanos ratificaron la creación de la *Unión Centroamericana mediante la firma de la Declaración de Managua*, que a propuesta de El Salvador y Honduras persigue la integración regional. Según el documento, esta unión ha de realizarse en un proceso gradual y progresivo y sin plazos definidos. El acuerdo fue firmado por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y el primer ministro de Belice, participando como observador el vicepresidente de la República Dominicana, Jaime Fernández.

Costa Rica, un país sin fuerzas armadas, ve en el tráfico de armas su riesgo principal y culpa como principal responsable a la guerra fría, que las ha puesto en el mercado internacional a precios muy bajos. Este año 1997 ha sido un período de precampaña electoral de las elecciones generales que se celebrarán en febrero del año próximo, en la que se teme una abstención de casi el 50 por ciento, pues los dos partidos mayoritarios, la Unión Social Cristiana y el socialdemócrata Liberación Nacional, se han visto envueltos en varios escándalos. El primero por aparentes negocios sucios con hombres de negocios mexicanos y el segundo por unas elecciones internas poco transparentes. Desde el punto de vista económico, el gasto público no ha sido contenido ni tampoco se ha reducido la deuda, que supera los mil millones de dólares. El 9 de mayo de 1997, Centroamérica y Estados Unidos suscribieron un «histórico» acuerdo de Cielos Abiertos, considerado por el secretario norteamericano de Transportes, D.E. Slater, como «el más grande que se haya firmado alguna vez por su país». Cielos Abiertos fue uno de los temas en los que se concretó la Cumbre de San José entre Estados Unidos, Centroamérica, Belice y la República Dominicana. El acuerdo fue suscrito en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Costa Rica, subrayando el canciller anfitrión que los acuerdos marcaban una nueva era en las relaciones aerocomerciales entre Estados Unidos y Centroamérica.

Para *Panamá*, la amenaza más seria es un posible estallido social derivado de los ajustes económicos, el desempleo y la marginación de grandes sectores de población, llegándose a decir que «Panamá es una bomba de tiempo, donde la pobreza y la desesperación son los detonadores». Por otro lado, los panameños consideran que necesitan unas fuerzas armadas aunque solo fuese para defender el Canal contra la inestabilidad, la vio-

lencia, el desorden y el terrorismo, pues por el acuerdo suscrito por el presidente Carter con el general Osmar Torrijos, el 31 de diciembre de 1999 los Estados Unidos abandonarán Panamá. A este respecto, los Estados Unidos han ofrecido que una de sus instalaciones en el Canal, la base aérea de Howard, se convierta en un Centro Multilateral Antidroga, proyecto al que Brasil, Colombia y México han manifestado su adhesión. Esta base es utilizada hoy día como centro estratégico contra el narcotráfico, pues desde la misma se realizan cientos de vuelos norteamericanos en misiones de vigilancia y control sobre las regiones Andina, del Amazonas y el Caribe. La izquierda ve, en las negociaciones que el presidente Pérez-Balladares mantiene con los representantes de Washington, una clara violación de los acuerdos Torrijos-Carter, que supondría el mantenimiento de la presencia de las tropas norteamericanas en el Canal, instalación considerada como emblemática del imperialismo estadounidense. Pero el presidente Balladares desea concluir las negociaciones con Washington antes del comienzo de 1998, tal como aseguró a finales de noviembre a una comisión de doce parlamentarios europeos de Alemania, España, Italia y Países Bajos, responsables de las relaciones con México y Centroamérica. La actividad gubernamental gira como es natural alrededor de la nacionalización del Canal, en una febril tarea para privatizar la gestión de puertos, ferrocarriles y otras instalaciones financiadas mayoritariamente por Taiwan, pues se pretende demostrar al mundo en el año 2000 que Panamá sabe administrar y controlar tan estratégica vía oceánica, por cierto el año en que la capital será sede de la X Cumbre Iberoamericana. Pero la creciente presión fronteriza de la guerrilla colombiana y del narcotráfico en los estrechos de Darien y la de soldados norteamericanos en la zona están llevando al Gobierno a la creación de una fuerza militar, lo que representaría un trascendental cambio de la situación y la vuelta a la militarización anterior a 1989, cuando los Estados Unidos desmantelaron sus fuerzas armadas y crearon una fuerza de policía pública.

La octava Reunión Mixta Centroamérica-Unión Europea concluyó el 20 de junio de 1997 en Panamá con un respaldo al proceso de fortalecimiento y modernización de las instituciones regionales en la zona y un apoyo a la puesta en marcha de la reforma institucional que se derive del proceso. El 7 de septiembre, el Gobierno panameño inauguró el Congreso Universal del Canal de Panamá, acto que contó con la asistencia de los presidentes de Honduras y Nicaragua y del presidente de Taiwán, Lee Teng-Hui.

Cuba sigue siendo considerada por los Estados Unidos como una amenaza a su seguridad, clásica de la Guerra Fría. A partir de la llegada de

Castro al poder, los estrategas del Pentágono han venido considerando machaconamente al régimen cubano como una de sus más graves amenazas; así por ejemplo, ya en 1981 era la tercera en importancia después de la URSS/Pacto de Varsovia y de la República Popular China. Esta rigidez en la postura de Washington ha creado serias tensiones de Estados Unidos con Canadá y México, sus aliados en el NAFTA, y con la Comunidad Europea, en particular desde la aprobación por el Congreso en 1996 del *Acta para la Libertad y la Solidaridad Democrática con Cuba*, más conocida como la *Ley Helms-Burton*, que ha sido denunciada ante la Organización Mundial del Comercio. Aunque la mayoría de las naciones están en favor y apoyan una transición de Cuba hacia la democracia, sin embargo consideran que la postura norteamericana, en vez de debilitar el régimen castrista lo fortalece ante la opinión de la población cubana, que es la que sufre el bloqueo económico, aparte que Fidel Castro sabe como utilizar su papel de víctima en esta grave situación.

La *Ley Helms-Burton*, más allá de las graves consecuencias políticas que podrían derivarse de su aplicación, está considerada por los foros internacionales como una clara violación del libre comercio, especialmente el Título III, que pretende impedir que países que no acaten el embargo contra la isla caribeña sigan manteniendo e incrementando su presencia en ese mercado. Dicha ley ha sido concebida para reforzar las sanciones internacionales contra el gobierno de Fidel Castro y «fomentar elecciones libres y justas en Cuba bajo la supervisión de observadores internacionales, asistir a un gobierno de transición y a un gobierno democrático y apoyar a la isla en el reestablecimiento de su libertad». Incluye el abandono de la isla de Fidel Castro y de su hermano Raúl. Además de una clara violación del Derecho Internacional, por lo que supone la injerencia en la vida interna de un país, sea del corte político que sea, no parece razonable que este caso no se aplique con la misma vara de medir que Washington tiene para la República Popular China (el mayor mercado del mundo), para los países productores de petróleo de Oriente Medio y para otras naciones donde no se respetan los derechos humanos, pero donde los Estados Unidos tienen intereses estratégicos. El Título III de esta ley establece el derecho de acción que en los Tribunales norteamericanos tienen empresas y ciudadanos estadounidenses, sobre bienes expropiados por el Gobierno Cubano, para demandar a los hoy propietarios de esos activos, lo que les otorga la posibilidad de que un juez los indemnice utilizando propiedades o inversiones de las empresas que tienen negocios con Cuba. En cuanto al Artículo IV, establece que los Estados Unidos pue-

den suspender la emisión de visados para empresarios, funcionarios y sus familiares, de industrias que realicen negocios con Cuba en propiedades confiscadas que pertenecían a empresas estadounidenses o a cubanos que en la actualidad son estadounidenses. La inoportunidad de la *Ley Helms-Burton* (nombre de los dos congresistas que la impulsaron) ha sido puesta de manifiesto por la actitud contraria de la Comunidad Europea, de otras naciones y más reciente en la VII Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela, en la que además de rechazar su puesta en práctica y las recientes acciones del Congreso orientadas a ampliar el alcance de la legislación, se exhorta a Washington para que reconsidere su puesta en práctica por considerarla que atenta a los principios de la convivencia internacional. La presión internacional, en particular de la Comunidad Europea, ha llevado a que el presidente Clinton haya prorrogado la suspensión del Artículo III el 16 de julio del presente año por un período de seis meses.

Pero las críticas a la *Ley Helms-Burton* han venido desde la misma Iglesia Católica y el propio arzobispo Rodríguez Madariaga, de Honduras, presidente de la Conferencia episcopal iberoamericana, durante el Sínodo de obispos de América, anteriormente citado, condenó abiertamente en Roma el embargo que sufre Cuba desde hace más de treinta años. «A menudo hemos dicho que los embargos no son el camino para resolver los problemas, porque solamente golpean a los más pobres».

El 12 de octubre llegaron por vía aérea, procedentes de Bolivia, los restos del mítico «Che» Guevara, que sería enterrado con honores militares en Santa Clara, donde recibió sepultura el 16 de octubre en la base del monumento erigido en la plaza que lleva su nombre. El 23 de noviembre falleció en Miami Mas Canosa, presidente de la junta directiva de la radical e influyente Fundación Nacional Cubano Americana, que en los últimos años se había convertido en el enemigo político de Fidel Castro más prominente en el extranjero y al que en los Estados Unidos se le consideraba como la alternativa democrática al líder del régimen cubano.

Por lo que respecta a la economía, aunque Cuba va abriéndose a las inversiones extranjeras, la mala cosecha de la zafra azucarera de este año, que obligó a destituir al ministro del Azúcar y sustituirle por el general Ulises Rosales, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y sobre todo el embargo norteamericano han hecho que el crecimiento económico esté siendo menor de lo esperado. En opinión del ministro de economía, Jose Luis Rodríguez, se prevé un tímido incremento entre el 2.5 y el 3.5

por ciento del producto interior bruto para 1998, después de que no se haya cumplido para 1997 el objetivo de crecer un 4 por ciento.

La visita de Su Santidad Juan Pablo II, en 1998, a la isla será una buena prueba de fuego para la solidez o crisis del régimen cubano, pues conviene recordar que este Papa polaco está considerado como uno de los artífices, si no el más importante, de la caída del comunismo en Europa. El viaje papal tendrá lugar entre el 21 y 25 de enero próximo y Fidel Castro ha comenzado a dar pruebas de buena voluntad hacia el Pontífice declarando festivo el día de Navidad, algo que había sido prohibido hacía 30 años, e igualmente ha permitido que el mensaje de Juan Pablo II a la isla, con motivo de su visita, haya sido recogido en su primera página por el único diario existente, *Gramma*. En sus palabras, el Papa aseguraba que se dirigía a todos los cubanos, sin distinción de credo, ideología, raza, opinión política o situación económica y que «acudirá para confirmarles en la fe, esa fe que a veces ha sido tan reprobada». El gobierno cubano pondrá la mitad del transporte público a disposición de los fieles que deseen asistir a los distintos actos religiosos previstos.

La *República Dominicana*, que ocupa los dos tercios de la isla La Española, goza de una considerable estabilidad política y de una economía estable, habiendo disminuido notablemente su tasa de inflación al bajar en 1996 hasta el 5,4 por ciento y reducido su deuda externa, aunque se espera que en 1997 pudiera haber algún repunte inflacionario. El presidente Leonel Fernández tomó posesión el 16 de agosto de 1996, después de unas elecciones a las que se invitó a la Unión Europea que enviase un equipo de observadores para que se comprobase la transparencia y regularidad de las mismas. El nuevo mandatario ha logrado, en su primer año como presidente, que su país ingrese en el Mercado Común del Caribe y en el grupo de naciones centroamericanas, sacándolo así del cierto aislamiento internacional que venía padeciendo. El 9 de agosto, tres dirigentes de la banda terrorista ETA, que se encontraban en Santo Domingo desde 1989, fueron expulsados y entregados a España.

Argentina no percibe hoy una clara amenaza a su soberanía nacional procedente del exterior. Normalizada la situación institucional y las relaciones con gran Bretaña después del conflicto por las Islas Malvinas, la gran nación del Atlántico Sur se ha convertido en uno de los más valiosos cooperantes en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Después de la gran reducción de los efectivos de sus fuerzas armadas, Argentina ha emprendido un modesto programa de modernización del material militar,

del cual hay que destacar que de los sistemas adquiridos no parece desprenderse ningún ánimo de expansión territorial. El director de la Escuela de Defensa Nacional de Argentina, el diplomático Guillermo Gasió, único civil que dirige un centro de estas características en Iberoamérica, en el seminario antes citado, que se celebró en febrero de 1996 en el CESE-DEN, manifestó que la experiencia vivida en el país entre los años 1976 y 1983 convirtió las Fuerzas Armadas en una pesada carga por la cual todavía estaba pagando un elevado coste. Por ello, opina que debía quedar claro que la defensa nacional es una cuestión de estado y de gestión y control civil. La nueva política argentina ha tomado ya una serie de medidas, entre las que están la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el desmantelamiento de su programa nuclear y del proyecto Cóndor de tecnología de misiles. Junto a estas premisas, el futuro de las fuerzas armadas argentinas estará condicionado por la mejora de las relaciones con Chile, la aproximación a los Estados Unidos y el fortalecimiento del MERCOSUR. Las históricas discusiones con Chile sobre los Hielos Continentales o Campos de Hielo han quedado solventadas por el acuerdo firmado en 1991, a falta de ser ratificado por los respectivos parlamentos y cuyas relaciones bilaterales en materia de defensa se han institucionalizado en noviembre de 1995, fecha en la que se firmó un memorándum de entendimiento en materia de seguridad, por el cual se creó un Comité Permanente de Seguridad, lo que significa un paso trascendente en la cooperación de ambos países en el área de la defensa. La reunión celebrada en julio de 1997, en la localidad chilena de Zapallar, representa un avance notable en las relaciones de ambos países. La visita del presidente Clinton a Buenos Aires, a mediados de octubre de este año, ha servido para que los Estados Unidos hayan notificado al Congreso la designación de Argentina como aliado principal no-OTAN, que fue aprobada el 9 de noviembre, lo que representará a sus fuerzas armadas tener acceso a información clasificada en materia de defensa y otras ventajas materiales como que las empresas argentinas puedan participar en licitaciones de compras de equipos y armamentos del Pentágono. Esta distinción norteamericana se debe entre otras razones a la continua y creciente participación argentina en misiones de paz de Naciones Unidas, en las que hasta ahora ha estado presente en 16 de estos cometidos. Tal distinción estadounidense solo la poseen Egipto, Israel, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y la República de Corea. Así mismo, el presidente Menen solicitó del mandatario norteamericano su mediación sobre el tema Malvinas, sobre la base de las resoluciones de la OEA y las Naciones Unidas. Por su parte, Clinton instó al jefe del estado argentino a una mayor cooperación en la lucha contra el nar-

costráfico y la corrupción y públicamente comentó que si la democracia sobrevive en Argentina habría menos corrupción.

En materia comercial, los dos estadistas coincidieron en que existe un campo propicio para incrementar el intercambio y lograr un mayor equilibrio de la balanza comercial, recordando que Estados Unidos se ha convertido entre 1990 y 1996 en el primer inversor en Argentina, con un 33 por ciento del total.

Pero el desgaste de los ocho años en el poder hizo que el partido Justicialista del presidente Menem perdiese en las elecciones legislativas del 26 de octubre la mayoría absoluta en el Congreso, ante la coalición formada por la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín y el emergente Frepaso de Fernández Meñide, por lo que desde el propio partido se le ha comenzado a exigir el retorno a los principios peronistas. Sin embargo, Argentina terminaría 1997 prácticamente con una inflación negativa, por primera vez en medio siglo (desde 1947), gracias al estricto ajuste económico neoliberal con tipo de cambio fijo de un peso por dólar, vigente desde 1991, y que puso al país a salvo de los mercados asiáticos. En los últimos 12 meses, el continuo descenso de la inflación dejó los precios en una tasa interanual del -0.1 por ciento, por lo que en la nación está de moda el término deflación. Los precios han bajado entre el 30 y 50 por ciento, según los sectores, e igualmente el coste de la contratación ha permitido disminuir el paro del 16.1 por ciento al 13.8, mientras que el crecimiento económico anual se situó en el 8 por ciento, todo ello debido a que el motor de la economía han sido las exportaciones. El impacto de la crisis económica brasileña, su mayor socio en el MERCOSUR, se confía sea contrarrestado por la inversión extranjera, que hasta el año 2000 está comprometida en torno a los 60 mil millones de dólares. Argentina accederá en 1998 a un nuevo acuerdo crediticio de tres años con el Fondo Monetario Internacional que facilitará el Plan de Convertibilidad de Menem, que incluye la privatización de las grandes empresas públicas.

Bolivia se encuentra en el centro de la lucha que mantienen los cárteles de la droga y la política antinarcótica norteamericana, pero con la ayuda de Washington ha creado unidades especiales para eliminar las plantaciones clandestinas de coca en El Chapare, zona tropical situada al este de la ciudad andina de Cochabamba. En marzo de 1996, los militares establecieron en Chipiriri, en la selva, un centro de entrenamiento bajo la supervisión de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELCN. En este proceso, el anterior presidente Sánchez de Lozada se comprometió a eli-

minar la coca del Charare para el año 2000, pero conforme esta lucha se incrementa aumentan las denuncias de violación de los derechos humanos.

En diciembre de 1996 se celebró, en Santa Cruz de la Sierra, la Cumbre de las Américas, dedicada al Desarrollo Sostenible y cuya Declaración presta especial atención a las condiciones de vida de las minorías, poblaciones indígenas, mujeres, niños, ancianos y discapacitados, advirtiendo que la erradicación de la pobreza solo será posible con políticas que aborden las interrelaciones entre ser humano y naturaleza.

El 18 de marzo del presente año, Bolivia y los países del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron un acuerdo por el cual crearían un banco regional a partir del Fondo Playa, ya establecido por estos países. Bolivia pretende encabezar la adhesión al MERCOSUR de los miembros del Pacto Andino.

En las elecciones generales celebradas en junio, el exgeneral Hugo Banzer, al frente de la Acción Democrática Nacionalista, se proclamó vencedor por mayoría relativa, lo que le obliga a pactar con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Unión Cívica Solidaridad y Conciencia Patria de la indígena Aymara Redios Loza para salir elegido democráticamente presidente, puesto que en la primera votación no alcanzó los votos necesarios, siendo investido como primer mandatario el 6 de agosto de este año. Los cuatro partidos conformaron una alianza que les otorgó más de los dos tercios de los escaños del Parlamento, integrado por 130 diputados y 27 senadores. La fecha de la investidura coincidió con la celebración del 172 aniversario de la proclamación de la República, creada por Simón Bolívar, y al acto de toma de posesión asistió el Príncipe de Asturias y los presidentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Banzer ha prometido luchar contra la pobreza y continuar la política antidroga de su antecesor, habiendo comenzado a investigar las privatizaciones de las empresas, que se estaban realizando con cláusulas desconocidas por el Congreso y con capitalizaciones inferiores al valor real.

Brasil, considerada la primera potencia económica iberoamericana, ha definido su política de defensa nacional en una directiva promulgada por el presidente Cardoso en 1996 y actualmente en vigor, en la que expresa su voluntad de convivencia pacífica en la comunidad internacional, pero dispuesto a defenderse de aquellas amenazas externas que pudieran poner en peligro su patrimonio o sus intereses vitales. Igualmente, advierte que persisten zonas de inestabilidad en algunos países próximos, en concreto

límites con la Amazonía brasileña, que junto con el crimen organizado internacional son dos temas de gran preocupación. El documento define los objetivos de la defensa nacional y la orientación estratégica en la que expone su condición continental y de proyección atlántica y del que ha desaparecido el concepto tradicional de su doctrina militar de que la principal amenaza provenía del sur. A principios del presente año, Brasil ha comenzado a poner en práctica el Plan Nacional de Defensa, que había sido anunciado el 17 de noviembre de 1996, y el presidente Cardoso informó que había solicitado al Congreso Nacional la ratificación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Brasil también se ha mostrado un entusiasta cooperador en las misiones de paz de las Naciones Unidas.

La vida política brasileña ha estado marcada por las discusiones y negociaciones para reformar la Constitución de forma que permita una nueva reelección del Presidente Cardoso, cuya gestión aprueba la mayoría del país y la coalición gubernamental conserva una sólida posición en las encuestas, respaldada por los éxitos económicos. El presidente, que en su anterior mandato había lanzado el llamado «Plan Real», ha conseguido que la inflación que en 1994 se elevaba al 2.502,5 por ciento haya bajado en 1997 al 6.8, y consolidado el crecimiento económico en torno al 3.5 por cien, así como fortalecer el peso de Brasil en el MERCOSUR. Pero en este grupo existe el temor de que la crisis de los mercados asiáticos afecte a la economía brasileña, que se ha visto obligada a un duro ajuste fiscal para defender la paridad entre la moneda nacional, el real, y el dólar. El ajuste, que incluye un incremento del arancel común de MERCOSUR, ha suscitado una dura respuesta de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), el segundo grupo comercial del área, pues consideran que en lugar de una apertura de los mercados parece que se pretende su cierre. El sector brasileño más afectado por el alza de los aranceles e impuestos será el de la automoción, que en 1996 exportó a Argentina por valor de 1.500 millones de dólares.

El 2 de octubre, SS el Papa Juan Pablo II llegó a Río de Janeiro en su tercera visita al país y en esta ocasión defendió los valores de la familia y las culturas indígenas, y manifestó su esperanza en un desarrollo «ordenado de conformidad con los principios de la justicia y la caridad cristianos».

La visita del presidente Clinton a mediados de octubre, si bien ha representado un espaldarazo al presidente Cardoso, tuvo un impacto negativo en la opinión pública y en gran parte de la clase política, por la falta de

tacto en determinadas circunstancias que rodearon el viaje del mandatario estadounidense. A título de ejemplo está cómo se lamentaban los medios de comunicación brasileños de Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro parecían ocupadas por los servicios de seguridad norteamericanos. Por otro lado, Clinton no logró convencer a Cardoso sobre su proyecto de la Alianza de Libre Comercio Americana, pues Brasil prefiere afianzar la solidez del MERCOSUR, receloso del peso económico de Washington y advirtió que «el nuevo orden global no debe ser impuesto sino compartido, no debe ser explotador sino promotor del bienestar de la humanidad». Para Brasil no hay una correspondencia equilibrada, como lo demuestra el déficit de la balanza comercial favorable a los Estados Unidos en 5.000 millones de dólares.

En lo que a España se refiere, en agosto los 130 partidos de izquierda iberoamericanos y europeos que integran el Foro de Sao Paulo acordaron, en su séptimo encuentro, celebrado en Porto Alegre, repudiar a la coalición Herri Batasuna, que no volverá a ser invitada a participar en las citas anuales del Foro.

La agravación de la situación interna de *Colombia*, motivada por el conflicto armado con la guerrilla, la lucha contra el narcotráfico y la espiral de la violencia, ha hecho pasar a un segundo plano cualquier otro asunto o consideración en esta nación, donde se habla el mejor castellano de Iberoamérica. Los Estados Unidos retiraron la «certificación» al presidente Ernesto Samper en 1996, es decir su confianza por lo que consideraban falta de cooperación en la lucha antidroga, lo que significaba la abstención de su apoyo para obtener préstamos o créditos internacionales, la suspensión de toda clase de ayudas excepto la destinada a la guerra contra el narcotráfico y necesidades humanitarias, así como la imposición de sanciones económicas. Sin embargo, Washington continuó incrementando su asistencia a las fuerzas armadas colombianas, que iniciaron una vasta campaña para destruir los grandes cultivos de coca, enfrentándose a una guerrilla que dispone de grandes contingentes armados y a millares de campesinos que solo tienen como medio de subsistencia tales cultivos. La violenta respuesta de los campesinos y las masivas demostraciones callejeras lograron paralizar la campaña, pero una vez que aquellas remitieron, los militares volvieron a reanudarlas, lo que debilitó el prestigio presidencial ante los ciudadanos y su autoridad sobre las fuerzas armadas. En marzo de 1997 dimitió el Ministro de Defensa por presuntos vínculos con un narcotraficante prófugo y, con la excusa de la débil situación interna de Ernesto Samper, a pesar de los esfuerzos para erra-

dicar las plantaciones de coca, los Estados Unidos renovaron la retirada de la citada «certificación».

El 15 de junio, el gobierno recuperó la iniciativa de su programa de paz y llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, gracias al cual los guerrilleros liberaron a los militares que tenían secuestrados desde hacía varios meses, asistiendo a la entrega, como testigos, representantes de España, Holanda y Noruega. Más tarde, el 11 de agosto, el Director de la policía nacional, general Rosso Serrano, anunció la detención en Bogotá de Waldo Simeón Vargas, alias «El Ministro», considerado el rey de la heroína y poco más tarde sería detenido Julio César Nádél, jefe del cártel de la costa. Pese a estas desarticulaciones, la penetración de los cárteles en todos los estamentos sociales es innegable y continúa socavando la confianza de los ciudadanos en sus políticos y jueces. La «industria» del secuestro, común o político, continúa siendo una de las más productivas del país y varios españoles la han sufrido este año.

Una generosa oferta que el gobierno hizo a la guerrilla y grupos armados, al FARC y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue rechazada argumentando que el mandato de Samper es ilegítimo y exigiendo una Asamblea Constituyente. El FARC, que nació en 1949 pero renació con mayor fuerza en 1976, y el FLN controlan casi el 40 por ciento del país, según fuentes occidentales, y cuenta con unos 15.000 hombres fuertemente armados; solamente en los últimos diez años, la violencia que vive la nación ha causado 35.000 muertos. El 26 de octubre, el Gubernamental Partido Liberal, al que pertenece el presidente Ernesto Samper, ganó la mayoría de las alcaldías y gobernaciones del país frente al opositor Partido Conservador. Los resultados de los comicios regionales y locales señalan que los liberales ganaron 22 de los 32 puestos a gobernador en juego y más del 43 por ciento de las 1.071 alcaldías.

Durante la última Cumbre Iberoamericana, el presidente Samper solicitó de Fidel Castro su mediación ante los guerrilleros, toda vez que el líder cubano había ayudado mucho en el proceso de pacificación de El Salvador, a lo que respondió «haré lo que esté en mi mano», si bien ello no significa que Cuba se una al «Grupo de Amigos para la Paz de Colombia», integrado por España, Costa Rica, México y Venezuela, más conocido como «Firmantes de Nueva York», por haber sido esta ciudad donde sentaron sus bases José María Aznar, José María Figueres, Ernesto Zedillo y Rafael Caldera. El 9 de noviembre, y con ocasión de la VII Cumbre Iberoamericana, los cuatro estadistas firmaron una declaración conjunta en la

que, celebrando la expresión de la vocación democrática expresada por el pueblo de Colombia en las elecciones municipales del pasado 26 de octubre, reiteraban su voluntad y apoyo a cualquier esfuerzo que conduzca a la paz, siempre respetando el Estado de Derecho, e invitaban a los sectores amigos de la paz en Colombia a aunar esfuerzos para lograr la pacificación del país.

La política norteamericana respecto a la situación colombiana continúa sin variaciones pues, como ha afirmado el general McCaffrey, responsable de la lucha antidroga en los Estados Unidos, las organizaciones guerrilleras obtienen recursos masivos procedentes de los cárteles del narcotráfico y su capacidad de combate va en aumento, y ha lanzado la voz de alarma de que la estabilidad interna de Colombia es un asunto que concierne a todo el continente.

A pesar de la grave crisis nacional, en septiembre de 1997, el desempleo bajó al 12.2 por ciento, la inflación se sostuvo en las cotas marcadas por el Gobierno y el crecimiento de la producción se estima oscile entre el 2.7 y el 3 por ciento.

En agosto de 1997, el gobierno de *Chile* ha publicado el primer Libro Blanco de la Defensa en toda su historia, de acuerdo con el compromiso adquirido por el presidente Frei el 21 de mayo de 1994. El documento consta de seis partes con un total de veintidós capítulos, y en el mismo el presidente define que «nuestra Política de Defensa es eminentemente disuasiva y se desarrolla en el marco de la promoción de la paz, la seguridad y la cooperación en nuestra región». La definición de los objetivos nacionales excluye reivindicaciones territoriales en el ámbito nacional, el amparo de la identidad cultural y el resguardo de la capacidad productiva de toda amenaza externa; también se señala la determinación nacional de participación en operaciones de mantenimiento de la paz. En relación con la actividad contra el narcotráfico, se indica que la política establecida descarta el empleo de las fuerzas armadas como agentes de combate, que es responsabilidad del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones de la policía civil, aunque apoyen con medios materiales y de inteligencia a los organismos citados. El Libro Blanco ofrece una total transparencia en la justificación y explicación del gasto fiscal en defensa, aportando una completa y detallada información.

Como ya se comentó en el punto *Disminución de gastos militares*, el 7 de abril de 1997 la casa Blanca dio luz verde a la venta a Chile de aviones F.16, con lo que se puso fin al embargo de armas de alta tecnología a Ibe-

roamérica impuesto hacía veinte años por el entonces presidente Carter, debido a la proliferación de dictaduras militares.

El 19 de septiembre tuvo lugar el desfile del Día de Homenaje a las Glorias del Ejército, tradición militar con la que Chile celebra su independencia. A juicio de los analistas políticos, este año el acto supuso la virtual despedida del octogenario general Augusto Pinochet, quien el 11 de marzo de 1998 deberá dejar el mando de la Institución, por lo que el presidente Frei ha designado ya a su sucesor. Tal como prevé la Constitución chilena, Pinochet pasará a ejercer como senador vitalicio en su calidad de expresidente de la nación.

Para el gobierno chileno, la designación de Argentina como aliado principal no miembro de la OTAN, por parte de los Estados Unidos, es un error y así el Ministro de Defensa en unas declaraciones al diario Mercurio dijo «nosotros mantenemos enérgicamente que la política de Estados Unidos en el Cono Sur debe ser la misma para todos los países y no debe privilegiar a un país respecto a otro». El 19 de octubre, el Ministro de Asuntos Exteriores de Chile manifestó que no se iba a solicitar a Washington ningún estatus especial «por cosas que no hacemos, ni fuimos al Golfo, ni enviamos tropas a Haití, ni hemos enviado tropas a Bosnia». Chile había rechazado en agosto la designación de aliado principal.

Después de varios meses de ajuste económico, el segundo trimestre de 1997 volvió a disparar favorablemente los datos sobre el crecimiento del país, cuya inflación bajó al 5,5 por ciento y el PIB se incrementará nada menos que en un 5,8 por ciento real, si bien se temían ciertas pérdidas en los sectores maderero, salmonero y agrícola por las acusaciones de «dumping» por Estados Unidos.

El 12 de diciembre se conocieron los datos de las elecciones parlamentarias que han dado comienzo a la carrera presidencial, que tendrá lugar en 1999. La coalición gobernante, Concertación Democrática, obtuvo el 50.5 por ciento de los votos emitidos, seguida por la alianza derechista, que logró el 36.3 por ciento. Sin embargo, la Democracia Cristiana del partido del presidente Frei, integrante de la coalición gobernante, experimentó un ligero retroceso, mientras sus socios, Partido por la Democracia y Partido Socialista, mantuvieron prácticamente sus expectativas de voto. En la derecha, la Unión Demócrata Independiente ha visto fortalecidas sus aspiraciones al obtener seis nuevos senadores en la Cámara Alta.

La elección del populista Abdalá Bucharam de Guayaquil como presidente de *Ecuador*, al frente del partido Rodolista Ecuatoriano, no respondió a

las expectativas ni tampoco permitió la incorporación del país a las reformas neoliberales esperadas, por lo que, en enero de 1997, una gran mayoría de la población, principalmente indígena, expresó su rechazo a las medidas económicas anunciadas. El 14 de enero, Bucharam viajó a Perú para pedir perdón por las víctimas habidas en las históricas disputas fronterizas entre ambos países y se comprometió ante el Parlamento peruano a renunciar a una carrera armamentística en los próximos años. Pero el descontento general reinante en la nación, apoyado por la Iglesia Católica y el grupo de anteriores presidentes de la república, se convirtió en huelga general, que terminó en un acuerdo del Congreso de los Diputados, el 7 de febrero, por el que Bucharam fue destituido como presidente de la nación. Tras una pugna política entre la vicepresidenta Rosalía Arteaga y el titular de la Cámara, Fabián Alarcón, este fue proclamado presidente interino hasta agosto de 1998, por 57 votos de los 65 diputados presentes. Mientras tanto, Bucharam huyó a Panamá, aunque la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana ha solicitado su extradición, acusándole entre otros delitos del manejo irregular de 80 millones de dólares mientras duró su administración. El 25 de mayo se llevó a cabo un referéndum por el que se legalizaba la presidencia interina de Fabián Alarcón y la expulsión de Bucharam. Esta situación ha venido a refrendar la falta de un consenso social e institucional sobre las instituciones democráticas ecuatorianas y la dirección de la política económica del país. Ecuador, cuya transición a la democracia en 1979 era la primera en la región, no ha sido, hasta la fecha, capaz de consolidar un funcionamiento democrático estable, lo que hace que un 63 por ciento de la población vea negativamente el presente y futuro inmediato, pues además el crecimiento de la pobreza, paro, recesión y corrupción disminuye la credibilidad de la clase política, estando la inflación en unos valores alrededor del 24 por ciento. Por otro lado, aunque el 26 de agosto dos comisiones militares de Perú y Ecuador pactaron en Quito un acuerdo sobre el fomento de medidas de confianza entre ambos países para reducir los riesgos de enfrentamiento, en noviembre el general de la fuerza aérea, Hernán Quiroz, anunció que Ecuador pretende adquirir cazas norteamericanos F-16 y F-18 para neutralizar los 50 Mig-29 adquiridos por Perú a Bielorrusia, de los cuales 28 se encuentran ya operativos en la nación andina.

Los ecuatorianos fueron convocados a las urnas el uno de diciembre para elegir a los 70 asambleístas, de entre más de 900 candidatos, que deberán reformar la Constitución. Los partidos políticos tradicionales fueron los vencedores de estas elecciones legislativas, en las que el Partido Social

Cristiano es mayoritario en la nueva Asamblea, seguido de cerca por el Partido Social Conservador y más de lejos por la Democracia Popular, de centro izquierda, Izquierda Democrática, la alianza Radical-Liberal y el populista Partido Rodolista de Ecuador.

En un interesante análisis recogido por la Crónica Legislativa de la Cámara de Diputados mexicana, en noviembre de 1996, y bajo el título «Seguridad Nacional y Defensa a fin de Siglo», su autor, Raúl Benítez Manaut, dice que, a diferencia de otros países iberoamericanos, *México* continúa manteniendo los conceptos tradicionales de soberanía y que el desafío a fin de siglo para esta nación es que sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, tienen doctrinas de seguridad transnacionales. México basa su seguridad en un concepto integral de la realidad geopolítica y socioeconómica propia, sostenida en cuatro elementos. El primero es la política exterior y sus doctrinas de no intervención, autodeterminación de los pueblos y búsqueda de la solución pacífica de las controversias, razón por la que su Constitución señala explícitamente las limitaciones de envío de tropas al extranjero. El segundo elemento lo constituye su doctrina de defensa basada en tres planes DN1, DN2 y DN3, relacionados respectivamente con la defensa ante un agresor externo, al mantenimiento del orden interno y al despliegue militar para la protección de la población en caso de desastres. El diseño de políticas gubernamentales que logren el desarrollo socioeconómico del país y la gobernabilidad bajo un sistema democrático de gobierno, que garantice la convivencia pacífica entre los mexicanos, son el tercero y cuarto elementos. Esta doctrina está recogida en el Plan Nacional de Desarrollo en sus tres ediciones, 1983-1988, 1989-1994 y 1995-2000, que contempla los nuevos fenómenos que están alterando la estabilidad y la gobernabilidad del mundo como desafíos que pueden amenazar la Seguridad Nacional de México, sean los nacionalismos y fundamentalismos, al igual que el terrorismo. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, los dos principales desafíos son la pobreza de la población y el narcotráfico. Pero México se enfrenta a un gravísimo problema, el alzamiento indígena en el estado de Chiapas, encabezado por El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la reaparición de grupos armados que se consideraban desmantelados, como el EPR, que inicia sus acciones en junio de 1996 en el estado de Guerrero. El gobierno mexicano, al EZLN le reconoce una base social y por tanto legitimidad política, algo que no reconoce al EPR, al que denuncia su violencia y carácter terroristas.

Pero en opinión de Garduño Valero, que define «Tres Escenarios para la Democracia y la Seguridad Nacional», no existe duda de que vivimos en la

hora de la incertidumbre, tal como la calificó J.K. Galbraith. Bajo esta idea, el investigador mexicano plantea que los tres riesgos principales de su país son, uno de carácter electoral, otro derivado del comportamiento de las relaciones entre los procesos socioeconómicos y un tercero en torno a la revolución científico técnica, que tendrá un peso diferencial en los países centrales y los de la periferia. A su juicio, existe un escenario inmediato, el narcotráfico, si bien advierte que este riesgo debe dar un giro espectacular basado en que «los actuales carteles de la droga no han previsto que bajo nuevas tecnologías los mercados de consumidores podrían producir nuevas drogas de diseño, lo que excluirá de los mercados a las actuales tradicionales, generadas en la periferia». Garduño Valero señala que la lucha contra la corrupción es la única arma que el Estado de Derecho tendrá en sus manos y afirma que «el error más común es considerar que la seguridad es un problema de las fuerzas armadas pues, sin negar el papel protagonista de las mismas, la Seguridad no podría considerarse si no hay una base social que apoye y legitime un proyecto nacional». Concluye diciendo que, ante el próximo milenio, México debe introducir una reforma en el Sistema Político Electoral, reestablecer la moral pública, modernizar el aparato político administrativo, reestructurar las Fuerzas Armadas y definir un proyecto nacional que, de una u otra forma, articule la nación.

En enero de 1997, los presidentes de México y de Estados Unidos anunciaron que México saldará la totalidad de la deuda contraída con Norteamérica tras la crisis financiera de finales de 1994 y en una visita de Clinton a México, que tuvo lugar el 5 de mayo, abordó el problema de las migraciones y también de la lucha antidroga e igualmente discutió con el presidente Zedillo la consolidación de las alianzas comerciales y el aumento de oportunidades de desarrollo.

La infiltración de los narcos en todos los estamentos de la vida del país es ya una triste realidad y prueba de ello es que el 18 de febrero fue encarcelado el general Gutiérrez Rebollo, máximo responsable de la lucha antidroga, acusado de tráfico de drogas, cohecho y de atentar contra la seguridad nacional. Este hecho, y otra serie de acusaciones contra dos gobernadores, obligó al presidente a ordenar lo que se ha llamado «reforma integral», con el fin de perseguir la corrupción en diferentes ámbitos institucionales, incluida la Procuraduría General de la República. La decisión del presidente facilitó que Estados Unidos le concediese la «certificación», que había sido congelada por la cámara de Representantes norteamericana el 13 de marzo. Por otro lado, tal como han denunciado a

principios de diciembre algunos medios de comunicación mexicanos, miembros del cártel de Tijuana reciben entrenamiento de mercenarios de Oriente Próximo, que podrían estar vinculados a Hizbulá, Amal y la Yihad Islámica, incluyendo la instrucción en el manejo de armas, operaciones paramilitares y técnicas de vigilancia, seguimientos y tácticas para realizar secuestros y asesinatos. De esta forma, los cabecillas del cártel, los hermanos Arellano Félix, han conseguido detectar y neutralizar operaciones contra ellos que pretendían ejecutar los agentes antinarcostráfico. El cártel de Tijuana está considerado como el responsable del 40 por ciento del total de cocaína que entra en los Estados Unidos y se le achacan al menos 500 asesinatos de militares, policías y periodistas que han perseguido o denunciado sus acciones.

El 6 de julio se celebraron elecciones a la Cámara de Diputados, renovación de una cuarta parte del senado, la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, seis gobernadores, 215 diputados de asambleas locales y 260 ayuntamientos. El resultado de los comicios supuso un cambio espectacular en la historia de México, perdiendo la mayoría absoluta que venía disfrutando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hacía 60 años, que obtuvo 230 escaños, frente a los 125 del Partido de la Revolución Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y los 122 del Partido de Acción Nacional (PAN). Cárdenas triunfó en la Ciudad de México, doblando el número de votos del PRI y triplicando los del PAN. El 5 de diciembre, Cárdenas tomó posesión de la jefatura del Gobierno del distrito federal, acto al que asistió el presidente de la nación, pero seis días después se vio obligado a sustituir al jefe de la Policía Judicial que acaba de nombrar, al estar acusado de torturar y de connivencia con el narcotráfico.

Pero el problema del estado de Chiapas continúa vivo y a finales de noviembre volvieron a recrudecerse ataques de grupos paramilitares, como el ocurrido en la Zona del Ayuntamiento de Chenalhó, que obligó a que más de 4.000 indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvieran que huir a las montañas. Los paramilitares, que responden al nombre de Máscara Roja, siembran el terror y se les asocia con el PRI, aunque estas acusaciones no se han podido comprobar de una manera terminante, si bien, con motivo de la matanza ocurrida el 22 de diciembre en la comunidad de Acteal del Ayuntamiento de Chenalhó, las acusaciones sobre miembros del PRI van tomando un fundamento real. Ese día, los paramilitares asesinaron a 45 personas, todas ellas indios tzotziles, de las cuales 21 eran mujeres y 15 niños, mientras estaban rezando. El número de víctimas habidas en los tres últimos meses en esta

zona superan los 150, por lo que el gobierno del presidente Zedillo se encuentra ante una difícil situación, tanto ante la opinión pública interna, donde la oposición señala al PRI como instigador intelectual y ejecutor material, como ante la internacional, que le exige el castigo de los culpables. La reacción de la Iglesia Católica ha sido muy dura, SS. Juan Pablo II incluido, y la jerarquía eclesiástica mexicana, además de condenar la acción criminal cometida en las vísperas de la Navidad, ha rechazado lo que llama «el diabólico silencio de los cobardes». La situación en Chiapas se ha enrarecido de tal manera que el gobierno se vio obligado a enviar fuertes contingentes de tropas, apoyadas por vehículos blindados, helicópteros y aviones, por lo que los zapatistas consideran que lo que se pretende no es castigar a los culpables sino detener a su líder el subcomandante Marcos. La crisis se ha cobrado una nueva víctima, la del Ministro del Interior Emilio Chuayfett, que ha sido sustituido por el Secretario de Agricultura, el economista Francisco Labastida Ochoa. La matanza de Acteal ha servido al presidente Ernesto Zedillo para llevar a cabo la remodelación más importante en su Gobierno desde que accedió al poder en 1994, que abarca, hasta el momento, a cuatro carteras ministeriales, Interior, Agricultura, Asuntos Exteriores y Economía. Todo indica, pues, que el problema de Chiapas y sus consecuencias son el reto más grave que tiene ante sí el presidente mexicano.

El incidente más grave ocurrido en la historia reciente de *Paraguay* ocurrió el 22 de abril de 1996, cuando el general Lino César Oviedo, jefe del Ejército, se negó a dimitir a petición del presidente de la república, causando así una crisis de resonancia internacional que venía a perturbar la tendencia en Iberoamérica de consolidar los regímenes democráticos encabezados por la autoridad civil. Pero la presión de la Organización de Estados Americanos, encabezada por los Estados Unidos, y el apoyo popular al presidente Juan Carlos Wasmosy obligaron a pedir el retiro al indisciplinado general. Pero la vida política paraguaya no ha encontrado aún la calma necesaria, toda vez que el general Oviedo ganó el 23 de septiembre la candidatura del oficial Partido Colorado a las elecciones presidenciales de 1998, en las que se enfrentará a una coalición opositora.

El 19 de junio se inauguró en Asunción la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, a la que asistieron los presidentes de los cuatro países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que expresaron su apoyo al sistema democrático en la región. Posteriormente, en agosto, doce de los catorce Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, pues Honduras y Guyana, representantes de Centroamérica y el

Caribe, respectivamente, lo fueron por sus vicepresidentes, deliberaron en la XI Cumbre de este Grupo, cuyos resultados fueron recogidos en la llamada «Declaración de Asunción», en la que se abordan temas relacionados con la seguridad, el narcotráfico y la política hacia los Estados Unidos. En la Cumbre se descartó que la decisión norteamericana de levantar el embargo de armas modernas, que pesaba sobre Iberoamérica desde hace veinte años, pueda representar el inicio de una carrera armamentística en la región. La eventual disponibilidad para que Iberoamérica obtenga un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enfrentó a Argentina y Brasil, por lo que se acordó que Iberoamérica deba estar representada por más de un país en dicho organismo. En la reunión fue examinada la propuesta de agenda de la Unión Europea con vistas a la reunión que ambos grupos mantendrán en 1998, preparatoria de la Cumbre Iberoamérica-UE, que tendrá lugar en un país iberoamericano en 1999 y, tras la sesión inaugural, el presidente de Panamá fue designado presidente protempore del bloque continental y encargado de organizar el encuentro de 1998.

Aunque la tasa de inflación se mantiene sobre el 9 por ciento, cifra prevista para este año y 1998, sin embargo continúan los acuciantes problemas sociales, como el paro, la delincuencia o el déficit en salud y educación, los niños de la calle y la inestabilidad campesina, que absorbe el 70 por ciento de la pobreza y el 85 por ciento de la extrema pobreza de la nación.

Los Estados Unidos han venido desarrollando unas excelentes relaciones con el presidente de *Perú*, Alberto Fujimori, a pesar de la existencia de denuncias relacionadas con la corrupción y determinadas y oscuras relaciones de algunos oficiales con las zonas productoras de drogas, que no impidieron que Washington concediese a esta nación la «certificación» en 1996. Perú, junto con Colombia, ha permitido la instalación de estaciones radar para la vigilancia aérea del tráfico de drogas desde su territorio y Bolivia de los laboratorios de cocaína de Colombia, lo que ha permitido el derribo de cerca de 50 aviones por parte de la Fuerza Aérea peruana, en colaboración con el Mando Aéreo Sur norteamericano situado en Panamá. Ante el uso alternativo de los narcos de rutas terrestres y fluviales, Washington facilitó la ayuda apropiada para contrarrestar estas iniciativas, lo que obligó a que el tráfico de drogas se desplazase a las fronteras con Brasil, Ecuador y Paraguay.

Aunque el detenido cabecilla Guzmán ha instado a la guerrilla a adoptar acciones más políticas, una facción de Sendero Luminoso, conocida

como Sendero Rojo, ha venido incrementando sus acciones armadas en el Alto Huallaga y en el Valle de Apurímac. Poco después, el 17 de diciembre de 1996, un grupo del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, aprovechando la recepción ofrecida en Lima por el embajador japonés, con ocasión del cumpleaños del emperador Akihito, tomó por asalto la residencia diplomática cogiendo como rehenes a unos 800 invitados, si bien fueron liberando en los días siguientes a la mayoría, excepto a 72. La acción causó un gran impacto en la opinión pública, puesto que semanas antes Fujimori había anunciado que el MRTA estaba desarticulado. Los revolucionarios exigieron la liberación de 400 correccionarios encarcelados en el país, pretensión a la que se negó el presidente de la república; la crisis desatada obligaría a dimitir al Ministro del Interior. El 22 de abril de 1997, en una operación espectacular, unidades especiales de las fuerzas armadas y de la policía asaltaron la residencia del embajador, liberando a todos los rehenes, menos uno que resultó muerto. En el ataque, de menos de 30 minutos de duración perecieron dos miembros de las fuerzas de seguridad y los catorce miembros del comando guerrillero.

Como resultado de la acción, las encuestas volvieron a sonreír a Fujimori, que aprovechando la renuncia al cargo del ministro de Asuntos Exteriores, el 16 de julio efectuó una amplia remodelación ministerial que alcanzó también a las carteras de Interior, Defensa, Justicia y Pesca e intentó un control de los medios de comunicación, que inició con la expropiación del Canal 2. El 5 de agosto, en un intento de normalizar las Relaciones con Ecuador tras enfrentamiento militar habido en febrero de 1995, durante la llamada «Guerra del Cóndor», los presidentes peruano y de Ecuador celebraron su primer encuentro oficial en Bolivia, lo que permitiría que el 26 de agosto se firmase en Quito un acuerdo de medidas de confianza para reducir los riesgos de nuevos enfrentamientos.

La solución de la crisis de la embajada japonesa y los aceptables datos de las cifras macroeconómicas son un buen argumento para favorecer las inversiones extranjeras, cuyo aumento es innegable, aunque estos éxitos no reflejen que la mitad de la población peruana viva en el umbral de la pobreza. Todo ello ha llevado a que una gran mayoría de la población esté en desacuerdo con la política de Fujimori, como lo demuestran dos encuestas realizadas a finales de noviembre, una por la empresa Imagen y otra por la firma Analistas y Consultores, en las que solo un 31 por ciento de los consultados respaldan al presidente.

El 8 de diciembre se celebró en *Uruguay* un referéndum que permitió la reforma de la Constitución, que suponía una reforma de la Ley de Lemas, en vigor desde hacía ochenta años; de esta forma se establece un solo candidato y programa por partido político en los comicios presidenciales e incorpora una segunda vuelta electoral si no se consigue mayoría absoluta en la primera, reforzándose también las atribuciones del jefe del Gobierno. Esta reforma ha llevado a Uruguay a una continua precampaña electoral, aunque las elecciones no tendrán lugar hasta 1999 y el nuevo gobierno no se forme hasta el año 2000. La situación económica del país continúa mejorando, en una nación conocida en el pasado como la «Suiza americana», habiendo ya la inflación bajado del 15 por ciento, algo que no ocurría desde 1982, el PIB es superior al 5 por ciento y el paro está establecido alrededor del 12 por ciento. Sin embargo, la inseguridad es la nota más negativa en un país que estaba considerado tranquilo, pero que también ha vivido situaciones de corrupción policial y que en la actualidad se está convirtiendo en un centro importante del narcotráfico.

A mediados del mes de diciembre, los cuatro presidentes de los países integrantes del *Mercado Común del Sur*, MERCOSUR, más sus homólogos de Chile y Bolivia se reunieron en Montevideo en la cumbre anual de este grupo, bajo la sombra del reciente ajuste económico brasileño, que entre otras medidas contemplaba un incremento del arancel común, que pasó del 14 al 17 por ciento. Los presidentes de MERCOSUR, en particular Carlos Menem, discutieron una fórmula para disminuir el impacto que supondrá para sus economías el programa de control financiero brasileño. A este respecto, conviene recordar que el 30 por ciento de las exportaciones argentinas se dirige hacia Brasil, en una cifra que en 1996 rebasó los 6.500 millones de dólares, por lo que estiman que una posible devaluación del real sería muy perjudicial puesto que conllevaría un abaratamiento de las exportaciones brasileñas, que podrían inundar los países vecinos.

El duro ajuste económico que *Venezuela* tuvo que imponer en abril de 1996 ha sido una dolorosa pero inevitable medida para la economía del país, cuya crisis financiera era similar a la de Albania, pues el año pasado la inflación alcanzó la cifra de 103 por ciento, valor desproporcionado comparado con el de los países vecinos. El ajuste, conocido como la «Agenda de Venezuela», ha liberado el mercado de divisas, estableció el control de los salarios, eliminó los subsidios al transporte e incrementó los impuestos sobre las ventas. Estas impopulares medidas fueron adoptadas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e incluyen la privatización de las principales empresas públicas. La labor del presidente Caldera, a

pesar del coste político y de imagen, ha comenzado a dar sus frutos pues en 1997 la inflación ha caído ya por debajo del 40 por ciento, estimándose para 1998 que descienda a valores en torno al 25 por ciento. Caldera prefirió sacrificar su dorada vejez y volver a ocupar la presidencia 20 años después, habiendo tenido que afrontar numerosas huelgas, particularmente del sector público, ya que el ajuste contempla la reducción de 1.3 millones a 800.000 funcionarios.

Por otro lado, aunque Venezuela no está considerada como un país con problemas con el narcotráfico, sin embargo ha sufrido repetidamente incidentes con las guerrillas colombianas que cruzan su frontera huyendo de las fuerzas policiales, lo que ha creado una gran tensión entre las dos naciones, razón por la cual, en abril de 1997, Venezuela ha incrementado sus fuerzas en la región fronteriza en 10.000 soldados.

La guerrilla colombiana y el narcotráfico fueron los dos temas más importantes tratados por Rafael Caldera con el presidente Clinton en el viaje emprendido el 12 de octubre de este año por el mandatario norteamericano a Venezuela, Brasil y Argentina, a un mes escaso de la VII Cumbre Iberoamericana, que tendría lugar en Isla Margarita. Ambos estadistas firmaron un acuerdo de cooperación energética y otro especial antidroga por el que agentes norteamericanos podrían perseguir a los narcos en aguas territoriales venezolanas, así como otros convenios sobre asistencia legal y aduanera.

A mediados de febrero de 1997, el presidente Caldera inauguró el seminario sobre «La integración y la democracia del futuro en Iberoamérica», que contó con la participación de ocho expresidentes, de cara a la VII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno y que tuvo lugar entre los días 8 y 9 de noviembre y cuyo eje central, a propuesta del mandatario venezolano, fue el tema «Los valores éticos de la Democracia», que puede suponer una llamada de atención de lo que puede suceder en una democracia cuyas instituciones se debilitan por la corrupción, la falta de renovación y la crisis de confianza de los ciudadanos en los que les gobiernan.

La VII Cumbre Iberoamericana

Durante los días 8 y 9 de noviembre de 1997, se celebró en la Isla de Margarita, Venezuela, la VII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que vino a consolidar este tipo de reuniones como mecanismo excepcional de interlocución política y de cooperación, que se ha visto

acompañado por un proceso de afianzamiento democrático en la región y por los esfuerzos realizados, en muchos casos con éxito, por la recuperación del crecimiento económico, lo cual ha tenido una incidencia positiva en una mayor integración y participación de Iberoamérica en el concierto internacional. A su vez, la naturaleza bicontinental de las Cumbres Iberoamericanas ha servido además para enriquecer el diálogo entre Europa y las naciones al sur de los Estados Unidos.

El tema de la Cumbre fue «Los valores éticos de la democracia», puesto que el fortalecimiento democrático en estas naciones ha sido una preocupación constante en todas las Cumbres celebradas, desde Guadalajara a Viña del Mar, y constituye un eje fundamental de las relaciones de España con Iberoamérica. Con tal elección se continuaba con la línea de especialización temática iniciada en 1993, en la III Cumbre de Salvador de Bahía, «Desarrollo», que en Cartagena de Indias fue «Comercio e Integración», en Bariloche sería «Educación» y en 1996, en Chile, se dedicó a «Gobernabilidad». El Documento de Conclusiones de esta VII Cumbre, como viene siendo habitual en las anteriores, tiene tres partes diferenciadas pero imbricadas entre sí. Una primera de contenido eminentemente político, la segunda dedicada a la cooperación y la última que recoge los asuntos de especial interés. El texto recoge los principios fundacionales de las Cumbres, los cuales han venido consolidando la fuerza de la Comunidad Iberoamericana de naciones como espacio de concertación y cooperación de características propias y refleja las preocupaciones jurídicas, políticas, sociales y culturales de las naciones iberoamericanas en la actualidad.

Las bases de la declaración de Isla Margarita son:

- *Valores éticos de la democracia*, considerando a ésta no solamente como un sistema político sino también como una forma de vida, a la que los principios éticos le proporcionan solidez y continuidad.
- *Derechos humanos*, a los que los Estados están obligados a promover y garantizar su plena vigencia y respeto, dentro de una cooperación internacional que excluya la confrontación.
- *Justicia social*, ya que la consolidación de la democracia solo es factible en un ambiente económico basado en los principios de igualdad, justicia social y solidaridad.
- *Delincuencia internacional organizada*, que exige una intensa y coordinada cooperación en la lucha contra todas las formas de esta lacra social internacional.
- *Cooperación antiterrorista*, en la que se condena todas las formas del terrorismo y se expresa el compromiso de combatirlo con todos los

medios legales, de manera firme y conjunta, reafirmando todas las naciones iberoamericanas la voluntad de cooperación internacional.

- *Guerra contra el narcotráfico*, tanto contra el consumo, cultivo y producción como contra el comercio y tráfico, la distribución de todas las drogas ilícitas y todos aquellos delitos conexos, como por ejemplo el blanqueo de dinero. En la Cumbre se criticó la política de los Estados Unidos con respecto a lo que se conoce como medidas «extraterritoriales norteamericanas», tal como el llamado proceso de certificación en la lucha contra las drogas. El presidente mexicano había manifestado días antes que «Estados Unidos debería indemnizar a Iberoamérica por el enorme consumo de drogas que se registra en ese país» y el primer mandatario de Bolivia, Hugo Banzer, reiteró en la Cumbre que «debe ser la Organización de Estados Americanos la que evalúe la lucha de estas naciones contra el narcotráfico y no los Estados Unidos». Por otra parte, y a iniciativa del presidente del Gobierno español, los países iberoamericanos podrían coordinar sus posiciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la lucha contra el narcotráfico.
- *Lucha contra la corrupción*, puesto que puede producir la desestabilización institucional y amenazar por consiguiente al sistema democrático, ya que golpea la sociedad, el orden moral y la justicia. Esta determinación anticorrupción fue esbozada en la conferencia internacional que se celebró en Caracas en 1996, cuyos principios generales señalan que los estados deberán cumplir requisitos tales como suministrar información sobre cuentas bancarias bajo sospecha o facilitar la extradición de personajes acusados de prácticas ilegales. A este respecto, según refleja el estudio anual que realiza la organización no gubernamental Transparencia Internacional, siete de las 20 naciones más corruptas del mundo pertenecen a Iberoamérica. A título de ejemplo, el país anfitrión de la Cumbre, Venezuela, perdió por esta causa en los últimos 25 años doce billones de pesetas, a tenor del informe de 1996 de la Asociación Iberoamericana para los Derechos Humanos. No es de extrañar, por consiguiente, que tanto Bolivia como Venezuela fuesen los adalides de la propuesta de la lucha anticorrupción.
- *Transparencia electoral*, en la que se proclama la exigencia de que los procesos electorales no sean exclusivamente tutelados y controlados por los intereses de los partidos y los gobiernos, sino que también se cuente para ello con la participación de la sociedad civil.
- *Derecho a la información*, «por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de

información y de opinión, en los que se fundamenta el derecho que tienen las personas de recibir información libre, sin censuras ni restricción alguna». Este texto consensuado eliminó el adjetivo veraz del título del capítulo, tal como había venido defendiendo el Ejecutivo venezolano en el texto inicial. La Declaración condena enérgicamente los ataques o cualquier forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación social o los periodistas.

- *Deuda externa*, dándose respaldo a la posibilidad de encontrar un tratamiento más flexible para aliviar la gravosa carga que supone la deuda externa para algunas de las naciones iberoamericanas.
- *Desminado*. Exhortación a la comunidad internacional para que continúen cooperando y apoyando técnica y económicamente a los países de Centroamérica para que se puedan retirar o desactivar los miles de minas antipersonales dispersas por la región.
- *Cumbre Unión Europea-Iberoamérica y El Caribe*. Se expresa el apoyo a la iniciativa del presidente del Gobierno español José María Aznar, propuesta en la Cumbre anterior, de celebrar una cumbre entre Iberoamérica y El Caribe con la Unión Europea, a fin de consolidar el diálogo político ya existente, reforzar el dinamismo de los intercambios económicos y reafirmar la dimensión cultural y humana. Dicha Cumbre tendrá lugar en Brasil en 1999. La conciencia de que Iberoamérica afronta un desafío económico-social, acentuado por los avances de la tecnología y la globalización de la economía, exige un desarrollo político común que favorece la integración. Por ello, España impulsa en sus relaciones bilaterales una aceleración de los vínculos entre Iberoamérica y la Unión Europea, pues este debe ser nuestro papel fundamental como nación puente entre ambas orillas del Atlántico.
- *Ley Helms-Burton*, que consiguió un rechazo más firme y enérgico que el contenido en la Declaración de Viña del Mar, en la Cumbre de 1996, al ampliar las críticas y condenas iberoamericanas contra la creciente tendencia de los Estados Unidos de aplicar unilateral y extraterritorialmente medidas legislativas internas contra otra nación, pues viola las normas y principios del derecho internacional y la soberanía de los estados. «Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la puesta en práctica de la denominada ley Helms-Burton», dice la Declaración, «así como las acciones del Congreso de los Estados Unidos, orientadas a ampliar el alcance de tal legislación». Esta condena está considerada por los

analistas internacionales como un triunfo de Fidel Castro frente a la política del embargo norteamericano.

En el último capítulo, dedicado a los «Asuntos de especial interés» se recogen los cuatro epígrafes siguientes:

- *Gibraltar*. Se expresa el apoyo al proceso negociador entre los Gobiernos de Madrid y de Londres instaurado en la Declaración de Bruselas de 1984 para que, de acuerdo con la doctrina establecida por las Naciones Unidas, se encuentre al contencioso del Peñón de Gibraltar una solución negociada sobre la base del principio de la integridad territorial. Este apoyo a España, conseguido no sin esfuerzo, es un reconocimiento de gran trascendencia en favor de nuestra legítima e histórica reivindicación sobre Gibraltar.
- *Islas Malvinas*. En la misma línea se recoge la afirmación de que Argentina y el Reino Unido reanuden en breve las negociaciones tendentes a encontrar una solución a la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, incluyendo el principio de integridad territorial.
- *Timor Oriental*. Se expresa el apoyo a los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas de manera que se impulse el diálogo de la ONU que facilite una solución justa a la cuestión de este territorio portugués, exigencia de Lisboa que había sido ya incluida en otras Cumbres anteriores.
- *Lenguas española y portuguesa*. Se resalta la importancia de la difusión y enseñanza del español y del portugués, así como de la preservación de su uso como idiomas oficiales en los foros internacionales. De igual forma, la Declaración expresa su decidido apoyo para la obtención de una enseñanza de calidad de la lengua.

La Conferencia excluyó toda referencia de apoyo a la *Cumbre de las Américas*, que impulsa Estados Unidos y que se celebrará en marzo de 1998 en Chile. A través de esa reunión, Washington pretende dar un salto adelante en su proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que choca con los intereses de la Unión Europea y de los propios socios del MERCOSUR, la integración comercial más avanzada de Suramérica.

La Cumbre ha generado igualmente múltiples encuentros sectoriales, gubernamentales o no, en áreas tan variadas como la ciencia y la tecnología, el mundo empresarial y sindical, la juventud o los medios de comunicación. Por otro lado, ha venido a cristalizar un espacio de cooperación

iberoamericana, en el que todas las naciones miembros contribuyen en la medida de sus posibilidades a los programas de interés común aprobados. Sin embargo, y aunque el calendario de estas Conferencias ya tiene fijadas sus fechas hasta el año 2002, se considera necesario establecer algunos organismos y normas de funcionamiento que permitan llevar mejor a la práctica la ejecución de los acuerdos adoptados. Por ejemplo, en medios gubernamentales españoles se considera que debería establecerse una especie de Secretaría de carácter permanente, con un reducido número de personas y dirigida por el país anfitrión organizador, que garantizase la continuidad de los trabajos con más eficacia que hasta la fecha. De esta manera se iría hacia un modelo similar al de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea, señalándose así mismo que la duración debería ser de un día, pues los compromisos de los primeros mandatarios pueden obligar, como de hecho ocurrió en Isla Margarita, a que varios jefes de Estado abandonasen la Conferencia un día antes de lo previsto, lo que llevó a adelantar la firma de la Declaración final.

Con respecto a la reunión a celebrar en 1999 y que tendrá lugar en la Habana, los mandatarios iberoamericanos, en particular Argentina, El Salvador y Nicaragua, exigieron el respeto a la democracia pluripartidista y a la libertad de expresión como condición previa para que pudiera tener lugar la Cumbre en la isla caribeña.

Fortalecimiento de las relaciones entre Iberoamérica y la Unión Europea

El nuevo acuerdo de cooperación interregional de la Unión Europea con el MERCOSUR representa el primer paso hacia una asociación de carácter político y económico y del que merecen destacarse los ámbitos comercial, económico, interinstitucional, fortalecimiento de la integración regional y lucha contra el narcotráfico. Otro logro importante lo constituye las relaciones de la UE con Chile, cuya economía pujante y abierta, una de las más dinámicas de Iberoamérica, ha facilitado la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación que representa un importante instrumento en los ámbitos de los servicios, la inversión y la propiedad intelectual y que establece un proceso en dos etapas que debería cristalizar como objetivo final, si bien sin una fecha predeterminada, en una asociación de carácter político y económico con esta república.

La pertenencia de México al Tratado de Libre Comercio, su ingreso en la Organización Mundial de Comercio y su adscripción a la OCDE y a la

APEC le convierten en un socio privilegiado para la Unión Europea, cuyo consejo fijó en mayo de 1996 un mandato de negociación para un nuevo acuerdo con este país. El texto contempla una cooperación muy superior a la existente en el actual Acuerdo de Tercera Generación de 1991 y la intensificación del diálogo político. El aspecto más complicado, la creación de una zona de libre cambio, solicitada por México y defendida por España, facilitaría contrarrestar los efectos de la incorporación mexicana al Tratado de Libre Comercio y que la UE pueda ofrecer un desarme arancelario a México a un coste bastante bajo. A principios de junio de 1997 concluyeron en Bruselas las negociaciones de un Acuerdo económico, coordinación política y de cooperación y otro sobre aspectos comerciales y sus relaciones, cuya firma tuvo lugar en la capital belga de 8 de diciembre.

Mirando al futuro, hay que mencionar primeramente la propuesta del presidente del Gobierno español, José María Aznar, de celebrar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea e Iberoamérica y El Caribe. El reciente Consejo Europeo de Amsterdam ha recogido con gran interés la realización de este encuentro y ya se está trabajando para definir los distintos aspectos de esta Cumbre. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del área para Iberoamérica, el español Manuel Marín, pretende presentar a la Comisión una propuesta de negociación para la creación de una zona de libre cambio con MERCOSUR, cuyo acuerdo debe estar avanzado y dispuesto para la firma antes de la VIII Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Oporto en el otoño de 1998. En las mismas fechas, Marín espera que la Comisión Europea respalde un acuerdo similar con Chile y más adelante continuar el proceso con otros países como Bolivia, Perú y Venezuela.

Estos acuerdos no deben representar ninguna interferencia para el proyecto de los Estados Unidos de crear un Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA, pues como ha expresado el ya mencionado Comisario español, «la Unión Europea siempre apoya las iniciativas de liberalización comercial». Durante la comentada gira del presidente Clinton por Venezuela, Brasil y Argentina, el político norteamericano anunció que Estados Unidos «lucharía» con Europa por el mercado iberoamericano y que el proyecto sobre el ALCA será uno de sus objetivos en la II Cumbre de las Américas, que se celebrará en Santiago de Chile en 1998, donde pretende sentar las bases de su creación para el año 2005, pues no parece dispuesto a que la Unión Europea le dispute su tradicional hegemonía en lo que considera un feudo propio, Iberoamérica. Sin embargo, los planes de Clinton

han encontrado un serio contratiempo, ya que el Congreso no le ha autorizado para negociar acuerdos comerciales internacionales por el procedimiento fast track o vía rápida, lo que para Bruselas representa llevar la delantera, toda vez que los procedimientos de negociación comunitarios son también complejos. A su vez, los países del MERCOSUR muestran cierto recelo hacia el ALCA norteamericano, puesto que sus economías se verían afectadas por la inundación de productos made in USA.

Pero la Unión Europea desea profundizar en otros campos como en la viabilidad de programas que impliquen una reducción de la deuda, que a finales del pasado año aumentó un 8 por ciento en relación con el año precedente. Es por ello por lo que la idea de *Desarrollo Sostenible* va cobrando una fuerza especial, con el ánimo de hacer compatibles las necesidades de crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. Igualmente, en un mundo caracterizado por la interdependencia económica y la globalidad, la UE e Iberoamérica tienen por delante el reto de impulsar el *multilateralismo* en sus relaciones comerciales, reforzando la Organización Mundial del Comercio y cumpliendo los compromisos de la Ronda Uruguay. En el campo de la cooperación debe procurarse una mayor participación de Iberoamérica en los programas comunitarios de investigación y desarrollo y en otro campo muy grave, como es el de la lucha contra el *narcotráfico*, los esfuerzos realizados desde el lado europeo han sido hasta ahora insuficientes.

También la colaboración entre ambas partes en temas de seguridad, actualmente en una primera fase, debe ser impulsada mediante un diálogo más continuo en medidas de fomento de la confianza entre estados y regiones. Las relaciones entre ambas orillas del Atlántico deben ser fortalecidas para asegurar la estabilidad y prosperidad de los dos continentes en un mundo cada vez más interdependiente, donde ambas regiones comparten unos valores comunes y en particular Iberoamérica, España y Portugal, que tienen una historia y un presente entrelazados y que juntas deben construir un futuro común.

España e Iberoamérica

Los españoles quieren a Iberoamérica, pero cada vez menos. En la introducción de este análisis se menciona la encuesta que Demoscopia había realizado para la Asociación de Periodistas Europeos del 18 al 20 del pasado mes de octubre y sus resultados no pueden ser más desalentado-

res. Teóricamente, pudiera parecer que nuestros conciudadanos tienen un gran conocimiento del pasado y del futuro de las naciones con las que tantos vínculos históricos, de sangre, idioma y cultura nos unen, pero la realidad es preocupante; probablemente el fenómeno se deba a que nuestros intereses políticos y económicos más inmediatos han empezado a influir en los sentimientos y que miramos cada vez más a Europa y nos alejamos más de América.

Los datos de la encuesta son reveladores. En 1995, el 60 por ciento de los encuestados manifestaba que teníamos más semejanzas que diferencias con Iberoamérica; en 1997 esa cifra bajó al 49 por ciento. Igualmente, el 73 por ciento cree que tenemos más intereses comunes con Europa, mientras solo un 11 por ciento opina que con las naciones del otro lado del Atlántico.

Es indudable que la influencia de los medios de comunicación crea opinión pública, así como que la información que recibimos de aquellas naciones es casi siempre negativa, pues las principales noticias de los programas informativos de nuestras cadenas de televisión, o las primeras páginas de nuestros periódicos, suelen referirse a la pobreza, miseria, corrupción, narcotráfico, guerrillas, secuestros o asesinatos, lo que ha contribuido a que los españoles asocien Iberoamérica con esas lacras sociales. Igualmente, la inmigración procedente de Iberoamérica, que hemos recibido recientemente, es en su mayor parte de una baja cualificación profesional e incluso una parte ha pasado a la delincuencia. No es de extrañar que cuando se formula la pregunta, «¿qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en Iberoamérica?», un 25 por ciento responda que la pobreza, miseria o dificultades económicas; el 11 por ciento la lengua común; en tercer lugar, con el 9 por ciento, en hermanos o gente como nosotros, seguido de un 6 que lo asocia con viajes y el 5 por ciento con países en desarrollo.

Respecto hasta qué punto nos sentimos afectivamente cercanos a Iberoamérica, el 6,54 por ciento de 1995 ha disminuido a un 6,13 en octubre pasado, mientras que con relación a los países de la Unión Europea ha subido de un 5,62 a un 5,80.

El desconocimiento que se tiene de estas naciones es tan palpable que el 35 por ciento de los encuestados no es capaz de mencionar el nombre de un jefe de Estado iberoamericano y los que sí saben apenas pueden citar a 8, siendo Fidel Castro el más conocido. Con relación al mundo del arte, la música o el espectáculo, un 56 por ciento es incapaz de citar un solo

nombre, para llegar al 10 por ciento que responde que Carlos Gardel, muerto hace más de sesenta años. Y sobre cuáles son los escritores más conocidos, la mitad de los encuestados no saben responder y del otro 50 por ciento dan primero el nombre de Vargas Llosa (actualmente de nacionalidad española) y a continuación García Márquez, que estuvo viviendo en Barcelona.

Es cierto que a nivel institucional existen unas relaciones más sólidas y que del otro lado del Atlántico la imagen de la Corona, de la transición pacífica española a la democracia y de nuestra positiva integración en Europa, prestigian a España como ejemplo que muchos países iberoamericanos desearían seguir. Desde Iberoamérica se piensa y espera que una España fuerte en Europa puede ser el mejor defensor en las relaciones con la Unión Europea, pero también se observa qué solución se va a dar a los recientes y conocidos casos de corrupción que aquí hemos sufrido, toda vez que allí este fenómeno político y social afecta de manera muy seria.

Recientemente, el editorial de un prestigioso periódico nacional advertía: «La política internacional de España pivota necesariamente en torno a dos centros, Europa e Iberoamérica. Su actual vuelco hacia la primera, que es comprensible, no debe traducirse en que palidezca su interés por la segunda,...» Y parafraseando a Ortega y Gasset habría que decir que tal vez no haya pasado la hora de España en el mundo, pues la misión que aún nos corresponde en la historia sería contribuir a la unión espiritual con la América hispana. Dicho esto debemos alzar nuestra voz contra aquellos organismos, instituciones y medios de comunicación social españoles que utilizan el término Latinoamérica o América Latina, pues tal concepto no solo no existe históricamente, sino que es enormemente perjudicial en la educación y conciencia de nuestros compatriotas.

Indudablemente, hay que reconocer el enorme esfuerzo que desde el Gobierno de la nación se está haciendo en favor de incrementar nuestra presencia y colaboración política y económica con Iberoamérica. En este año 1997, los Reyes han realizado una visita oficial a México, el Rey participó en la VII Cumbre Iberoamericana en Venezuela, la Reina viajó a Guatemala y Paraguay, el Príncipe de Asturias representó a España en las tomas de posesión de los presidentes de Bolivia, Ecuador y Nicaragua y visitó Chile y el presidente del Gobierno José María Aznar, además de asistir a la Cumbre Iberoamericana, realizó visitas oficiales a Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, además de recibir en Madrid a los presidentes de Colombia y El Sal-

vador. Es objetivo fundamental de nuestra política nacional que España se convierta en el abanderado de Iberoamérica ante la Unión Europea y así, el 6 de marzo, la Unión aprobó la propuesta del presidente español de celebrar una Cumbre Unión Europea-Iberoamérica, que ya anteriormente Aznar había formulado en la VI Cumbre Iberoamericana en la ciudad chilena de Viña del Mar y que tendrá lugar en Brasil en 1999.

En cuanto la cooperación económica, España está realizando un gran esfuerzo en proporción a su capacidad. En 1996, España invirtió en Iberoamérica más del 50 por ciento de nuestras inversiones en el exterior, 940 mil millones de pesetas, que en comparación con los 290 mil millones de 1995 representa un aumento del 324 por cien. La inversión realizada en los primeros nueve meses de 1997 en Iberoamérica es superior a la inversión total de España en todo el mundo en 1996, habiéndose convertido en el primer inversor internacional en Perú y el segundo en Brasil y Argentina. Durante la visita que el jefe del Gobierno español efectuó en noviembre pasado a Centroamérica se concluyó la concesión de créditos de ayuda al desarrollo y contra la pobreza, por valor de 78.000 millones de pesetas, que serán repartidos casi por partes iguales entre El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En este periplo del presidente español se logró además un avance esencial en nuestra colaboración con Iberoamérica en asuntos de seguridad y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

En el año pasado de 1996, el capital privado español adquirió 67 compañías, siendo Chile el principal destinatario, realizándose siete operaciones por un montante total de 220 mil millones de pesetas. Ejemplos de inversiones son los de Endesa, que ha adquirido el 32 por ciento de la empresa chilena Enersis, los de Telefónica que controla el 43.6 por ciento de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, y los de otras compañías del sector eléctrico como Iberdrola y Unión Fenosa o el de varios bancos o grupos entre los que están BBV, Santander y Argentaria, que operan en diversos países. Por su parte Iberdrola Energía, Unión Eléctrica Canaria y Unión Eléctrica Fenosa se han calificado para optar a la privatización del sistema eléctrico de Isla Margarita y que constituye la primera de las privatizaciones eléctricas previstas en Venezuela.

Hay dos asuntos muy delicados que afectan a nuestras relaciones con tres naciones iberoamericanas muy queridas para nosotros; el primero es Cuba, el segundo el tema de los españoles desaparecidos durante los regímenes militares en Argentina y Chile. Con respecto a la isla caribeña,

España debe impulsar de forma decidida y generosa sus relaciones con el gobierno de Fidel Castro y convencer a Estados Unidos de que el embargo no es el camino, pues las consecuencias del bloqueo las sufre el pueblo cubano. A medida que la economía y el crecimiento del bienestar se acentúan, es más fácil que una dictadura se debilite y que el aire fresco de la democracia penetre en el entramado de la misma. Esperar a que la salud de Fidel Castro se quebrante sería cruel e injusto para nuestros hermanos cubanos.

El académico norteamericano Wayne S. Smith publicaba en la primavera de 1996, en la revista estadounidense *Foreign Affairs*, un interesante estudio sobre Cuba en el que señalaba que la ligera apertura económica introducida no podía tener marcha atrás, pues tendría unos efectos positivos que provocaría un cambio social, que a su vez presionaría en favor de una reforma política. Smith recordaba a los políticos de Washington ciertas analogías existentes entre estas primeras y tímidas reformas de La Habana y el comienzo de la transición española, dos naciones sometidas, cada una en su tiempo, a cierto aislamiento internacional y resaltaba que Estados Unidos obtuvo mayores beneficios con España cuando buscó la vía del diálogo. En este sentido, la apertura de la Casa de la Cultura de España, que será foro de Comunicación, puede también convertirse en un foro de debate sobre los problemas de Cuba. De igual forma, la designación de un Agregado de Defensa español en La Habana permitirá establecer una relación directa con las Fuerzas Armadas de la Isla y seguir de cerca el papel que están desempeñando o pueden desempeñar en el futuro. El año 1998 debe ser aprovechado por España para incrementar nuestras relaciones y presencia en Cuba, la última tierra española en América y cuyo suelo está regado por la sangre generosa de millares de españoles. Antes de 1999, los más altos representantes del Estado deberían pisar suelo cubano, pues en ese año se celebrará en La Habana la IX Cumbre Iberoamericana, a la que tendrían que asistir obligadamente SM, el Rey y el presidente del Gobierno. Si Juan Pablo II va en 1998 a la Isla, ¿por qué no hacerlo nosotros?

No pretendo entrar en la polémica política abierta recientemente por un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el que se pronunciaba contra la competencia de este órgano judicial para investigar la represión en Argentina y Chile, en la que hubo españoles desaparecidos; simplemente hacer una reflexión sobre si ello debe ser una iniciativa aislada del Poder Judicial. La Política nacional es responsabilidad del Gobierno de la nación y parte de aquélla es la Política Exterior. Crear tensiones con dos

naciones, como Argentina y Chile, desde un órgano judicial sin coordinación previa con el Ejecutivo considero que es un error, pues la acción en el exterior es una política de Estado, y el Estado lo sustentan tres poderes, por lo que cualquier decisión unilateral de uno de ellos, que pueda afectar a las competencias de los otros, lo único que produce son disfunciones y perjuicios, y como es el caso, a las buenas relaciones de España con Chile y Argentina.

Para concluir, estimo que España debe continuar sus esfuerzos para que el diálogo y la cooperación permitan reforzar y afianzar la dimensión iberoamericana de la Unión Europea. Por otro lado, España puede y debe ser un excelente enlace entre Estados Unidos e Iberoamérica, de forma que esa gran nación comprenda mejor las tradiciones, la cultura, la forma de ser y los valores de la Comunidad Iberoamericana. La declaración oficial del idioma español como la segunda lengua en los Estados Unidos sería un gesto de reconocimiento a la importancia y al peso específico que el grupo de naciones, al sur del Río Grande, tiene en el concierto mundial. Finalmente, de nada valdrían todos estos esfuerzos si no se consigue que los españoles vuelvan su mirada hacia Iberoamérica, donde nuestra presencia durante cuatro siglos no podemos ni debemos olvidar y a la que debemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, de manera que esa región pueda vivir en paz, en libertad y con unas condiciones sociales y económicas acordes con un mundo digno y civilizado. Como dijo SM. el Rey en su discurso en el acto de inauguración de la VII Cumbre Iberoamericana, en la Isla de Margarita, «los principios democráticos, de tolerancia y de diálogo, de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, constituyen pilares básicos de nuestra Comunidad Iberoamericana de Naciones».

ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

ARGENTINA

EXTENSIÓN, Km ²	2.767.000		
POBLACIÓN	34.860.000		
FUERZAS ARMADAS	73.000		
Ejército de Tierra	41.000		
Marina	20.000		
Fuerza Aérea	12.000		
Reservas	375.000		
MISIONES DE PAZ ONU	UNTAES, UNMOP, UNFICYP, MOMEF, UNPREDEP, UNIKOM, UNTSO, MINURSO		
DATOS ECONÓMICOS (1)	1996	1997	1998
PIB, millones	299.000	322.900	-
Crecimiento, %	4,7	8,0	-
Renta per cápita	8.577	9.262	-
Inflación %	0,4	(0,1)	-
Deuda externa, millones	91.400	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	3.800	3.900	4.000

BOLIVIA

EXTENSIÓN, Km ²	1.098.581		
POBLACIÓN	8.170.000		
FUERZAS ARMADAS	33.500		
Ejército de Tierra	25.000		
Marina	4.500		
Fuerza Aérea	4.000		
Reservas	-		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998 (2)
PIB, millones	6.660	7.000	7.275
Crecimiento, %	3,6	4,9	5,5
Renta per cápita	815	856	887
Inflación, %	12,5	7,5	6,9
Deuda externa, millones	5.013	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	155	140	-

(1) Dólares.

(2) Previsto.

BRASIL

EXTENSIÓN	8.511.965		
POBLACIÓN ¹⁶⁵	716.000		
FUERZAS ARMADAS	314.700		
Ejército de Tierra	200.000		
Marina	64.700		
Fuerza Aérea	50.000		
Reservas	1.115.000		
MISIONES DE PAZ ONU	UNOMA, UNTAES, UNMOP, MOMEF, UNPREDEP		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	749.000	770.000	795.000
Crecimiento, %	2,9	3,5	3,7
Renta per cápita	4.519	4.570	4.650
Inflación, %	16,5	6,8	7,3
Deuda externa, millones	173.600	-	-
Presupuesto de Defensa	14.000	15.900	-

COSTA RICA

EXTENSIÓN	51.100		
POBLACIÓN	3.532.000		
FUERZAS ARMADAS	Carece		
Ejército de Tierra			
Marina			
Fuerza Aérea			
Reservas			
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	9.093	9.275	9.600
Crecimiento, %	(0,8)	2,0	3,5
Renta per cápita	2.574	2.559	2.580
Inflación, %	17,5	12,5	13,0
Deuda Externa, millones	2.376	-	-
Presupuesto de Seguridad, millones	51	29	-

COLOMBIA

EXTENSIÓN, Km²	1.141.178
POBLACIÓN	37.700.000
FUERZAS ARMADAS	146.300
Ejército de Tierra	121.000
Marina	18.000
Fuerza Aérea	7.300
Reservas	60.700

MISIONES DE PAZ ONU

DATOS ECONÓMICOS

	1996	1997	1998
PIB, millones	85.800	88.200	88.580
Crecimiento, %	2,1	2,8	4,3
Renta per cápita	20,2	18,8	2.360
Inflación, %	2.275	2.308	17,2
Deuda Externa, millones	23.400	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	1.900	2.100	-

CUBA

EXTENSIÓN, Km²	114.524
POBLACIÓN	11.125.000
FUERZAS ARMADAS	55.000
Ejército de Tierra	40.000
Marina	5.000
Fuerza Aérea	10.000
Reservas	42.000

MISIONES DE PAZ ONU

DATOS ECONÓMICOS

	1996	1997	1998
PIB, millones	14.200	14.700	81.200
Crecimiento, %	7,8	3,0	6,7
Renta per cápita	1.280	1.305	5.485
Inflación, %	-	-	4,5
Deuda Externa, millones	11.000	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	700	700	-

CHILE

EXTENSIÓN,Km ²	756.946		
POBLACIÓN	14.580.000		
FUERZAS ARMADAS	94.300		
Ejército de Tierra	51.700		
Marina	24.500		
Fuerza Aérea	13.400		
Reservas	50.000		
MISIONES DE PAZ ONU	UNMIBH, MOMEF, UNMOGIP, UNTSO		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	71.900	76.100	81.200
Crecimiento, %	7,2	5,8	6,7
Renta per cápita	4.993	5.212	5.485
Inflación, %	7,3	5,1	4,5
Deuda Externa, millones	27.300	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	2.000	2.100	-

ECUADOR

EXTENSIÓN,Km ²	281.341		
POBLACIÓN	12.186.000		
FUERZAS ARMADAS	57.100		
Ejército de Tierra	50.000		
Marina	4.100		
Fuerza Aérea	3.000		
Reservas	100.000		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	19.000	19.500	20.000
Crecimiento, %	2,0	2,6	2,7
Renta per cápita	1.600	1.610	1.622
Inflación, %	24,4	28,9	23,5
Deuda Externa, millones	14.300	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	538	542	-

EL SALVADOR

EXTENSIÓN.Km ²	21.156		
POBLACIÓN	6.100.000		
FUERZAS ARMADAS	28.400		
Ejército de tierra	25.700		
Marina	1.100		
Fuerza Aérea	1.600		
Reservas	-		
MISIONES DE PAZ ONU	MINURSO		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	10.566	10.880	11.280
Crecimiento, %	3,0	3,0	3,5
Renta per cápita	1.732	1.785	1.800
Inflación, %	9,8	7,0	9,5
Deuda Externa, millones	2.770	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	125	89	-

GUATEMALA

EXTENSIÓN	108.890		
POBLACIÓN	11.250		
FUERZAS ARMADAS	35.700		
Ejército de Tierra	33.500		
Marina	1.500		
Fuerza Aérea	700		
Reservas	35.000		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	15.804	16.470	17.300
Crecimiento, %	3,1	4,2	5,0
Renta per cápita	1.410	1.470	1.500
Inflación, %	11,1	10,0	13,0
Deuda externa, millones	3.880	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	154	93	-

HONDURAS

EXTENSIÓN,Km²	112.000		
POBLACIÓN	6.275.000		
FUERZAS ARMADAS	18.800		
Ejército de Tierra	16.000		
Marina	1.000		
Fuerza Aérea	1.800		
Reservas	60.000		
MISIONES DE PAZ ONU	MINURSO		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	4.400	4.600	4.650
Crecimiento, %	2,9	3,9	3,0
Renta per cápita	700	720	725
Inflación, %	23,8	22,0	20,3
Deuda externa, millones	4.623	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	59	38	-

MEXICO

EXTENSIÓN,Km²	1.973.000		
POBLACIÓN	95.400.000		
FUERZAS ARMADAS	175.000		
Ejército de Tierra	130.000		
Marina	37.000		
Fuerza Aérea	8.000		
Reservas	300.000		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	335.000	350.000	360.000
Crecimiento, %	5,4	4	3,5
Renta per cápita	3.516	3.608	3.655
Inflación, %	35,5	17,6	12,0
Deuda externa, millones	173.000	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	3.100	2.900	-

NICARAGUA

EXTENSIÓN, Km ²	121.428 (excluidos 9.397 Km ² de lagos)		
POBLACIÓN	4.540.000		
FUERZAS ARMADAS	17.000		
Ejército de Tierra	15.000		
Marina	800		
Fuerza Aérea	1.200		
Reservas	-		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	2.019	2.100	2.220
Crecimiento, %	6,1	4	3,5
Renta per cápita	449	455	462
Inflación, %	11,6	9,0	10,8
Deuda externa, millones	6.000	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	36	39	-

PANAMÁ

EXTENSIÓN, Km ²	77.082		
POBLACIÓN	2.748.000		
FUERZAS ARMADAS	Carece		
Ejército de Tierra			
Marina			
Fuerza Aérea			
Reservas			
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	8.200	8.400	8.700
Crecimiento, %	2,5	3,4	4,3
Renta per cápita	3.046	3.060	3.085
Inflación, %	1,2	1,6	1,5
Deuda externa, millones	7.064	-	-
Presupuesto de Seguridad, millones	112	116	-

PARAGUAY

EXTENSIÓN,Km²	406.752		
POBLACIÓN	5.220.000		
FUERZAS ARMADAS	20.200		
Ejército de Tierra	14.900		
Marina	3.600		
Fuerza Aérea	1.700		
Reservas	164.500		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	9.500	9.630	9.875
Crecimiento, %	1,3	2,5	3,0
Renta per cápita	1.900	1.910	1.922
Inflación, %	8,2	8,7	10,9
Deuda externa, millones	2.400	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	112	122	-

PERÚ

EXTENSIÓN,Km²	1.285.215		
POBLACIÓN	24.575.000		
FUERZAS ARMADAS	125.000		
Ejército de Tierra	85.000		
Marina	25.000		
Fuerza Aérea	15.000		
Reservas	188.000		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, .millones	60.753	64.200	67.420
Crecimiento, %	2,6	5,6	5,0
Renta per cápita	2.542	2.590	2.650
Inflación, %	11,5	9,5	8,7
Deuda externa, millones	32.300	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	1.100	1.100	-

REPÚBLICA DOMINICANA

EXTENSIÓN, Km ²	48.422		
POBLACIÓN	8.000.000		
FUERZAS ARMADAS	24.500		
Ejército de tierra	15.000		
Marina	4.000		
Fuerza Aérea	5.500		
Reservas	-		
MISIONES DE PAZ ONU	-		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	13	178	14.000
14.425			
Crecimiento, %	7,3	6,3	3,0
Renta per cápita	1.647	1.720	1.750
Inflación, %	5,4	8,2	8,1
Deuda externa, millones	4.200	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	104 68	-	-

URUGUAY

EXTENSIÓN, Km ²	176.215		
POBLACIÓN	3.213.000		
FUERZAS ARMADAS	25.600		
Ejército de Tierra	17.600		
Marina	5.000		
Fuerza Aérea	3.000		
Reservas	-		
MISIONES DE PAZ ONU	UNOMA, MFO, GEORGIA, UNMOGIP, UNIKOM, UNOMIL, UNMOT, MINURSO		
DATOS ECONÓMICOS	1996	1997	1998
PIB, millones	18.900	19.945	20.960
Crecimiento, %	4,9	5,5	5,1
Renta per cápita	5.906	6.175	6.460
Inflación, %	28,3	14,2	10,0
Deuda externa, millones	5.500	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	276	301	-

VENEZUELA

EXTENSIÓN, Km ²	912.500		
POBLACIÓN	22.825.000		
FUERZAS ARMADAS	79.000		
Ejército de Tierra	34.000		
Marina	15.000		
Fuerza Aérea	7.000		
Reservas	8.000		
MISIONES DE PAZ ONU	UNIKOM, MINURSO		
DATOS ECONÓMICOS	1.996	1.997	1.998
PIB, millones	79.900	83.175	87.250
Crecimiento, %	(1,6)	4,1	3,9
Renta per cápita	3.500	3.570	3.670
Inflación, %	103	37,9	25,0
Deuda externa, millones	35.300	-	-
Presupuesto de Defensa, millones	922	981	1.100